

**COMITÉ PROVISORIO DE CONTROL OBSERVA
INFORME GENERAL. FORMULA RESERVA DE
AMPLIACIÓN.**

Sr. Juez:

Dr. RAFAEL PÉREZ BUSTAMENTE
(rafaelpb1953@hotmail.com) y SILVIA BEATRIZ ROMERO
(romeromighetto@gmail.com), ambos en representación y en carácter de
apoderados judiciales del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA;
LEANDRO MONZÓN (DNI 29.529.045) representante de los
trabajadores (SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
ACEITEROS Y DESMOTADORES DE ALGODON DE LOS
DEPARTAMENTOS DE GENERAL OBLIGADO Y SAN JAVIER)
con el patrocinio letrado del Dr. SEBASTIAN SPILLER L° XXXV F° 271
(sebastian.spiller1@gmail.com); JUAN WILFREDO LEMOS (DNI
30.291.284) y OSCAR ALBERTO CHAPARRO (DNI 13.488.312),
representantes de los trabajadores (SINDICATO OBREROS Y
EMPLEADOS ACEITEROS DEL DEPARTAMENTO DE SAN
LORENZO), con el patrocinio letrado de la Dra. MARÍA LAURA
CAMPAS, Mat. Prof. T.LIII F.59 / C. A. Terc. Circ. de Venado Tuerto
(estudiocampas@gmail.com); Dr. HERNÁN GUILLERMO
SEFUSATTI (hernansefusatti@estudiosefusatti.com), apoderado de
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS (ACA); Dr.
MATIAS LOPEZ FIGUEROA (Matias.Lopez.Figueroa@bruchou.com)
apoderado de INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
(IFC); Dr. MARTÍN BERETERVIDE

(Martin.Beretervide@bruchou.com) apoderado de NEDERLANDSE FINANCIERINGS- MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. (FMO); todos integrantes del COMITÉ PROVISORIO DE CONTROL, en los autos caratulados “VICENTIN S.A.I.C. S/ CONCURSO PREVENTIVO”, CUIJ 21-25023953-7, a V.S. decimos:

I - OBJETO. PRELIMINAR. LEGITIMACIÓN DEL COMITÉ PROVISORIO DE CONTROL:

Dentro del plazo legal estipulado al efecto, en los términos del art. 40 L.C.Q., se formulan por medio del presente escrito observaciones al Informe General presentado por la Sindicatura el pasado día 15 de marzo de 2021, solicitando de V.S. tenga presente dichas observaciones y/o requiera de la Sindicatura las aclaraciones y/o ampliaciones que considere necesarias.

A modo simplemente preliminar, cabe señalar que el Informe General es de una gran superficialidad, sesgado y carente de rigor técnico; poco aclara a los acreedores, en particular en una materia tan sensible como las causas del desequilibrio económico.

Su lectura y análisis transmite una sensación insólita a la luz de las circunstancias del caso: Vicentin es una empresa que ha tenido la mala fortuna de verse atacada por un sinnúmero de causas exógenas que determinaron su caída en cesación de pagos, sin que la empresa hubiera contribuido en nada a esa realidad. Todavía más: deja incluso una impresión de que hay más responsabilidad en los acreedores (financieros porque prestaron dinero; proveedores de granos porque se apuraron en fijar precio para sus ventas), que en la propia concursada.

A tal extremo llega el Informe.

Como se verá, ese abordaje sobre el punto, que es en definitiva el de la propia concursada y al que la Sindicatura adhiere de una manera explícita y sin condiciones, omitiendo el análisis de los aspectos más relevantes de la cuestión, no se sostiene desde ningún punto de vista: no resiste un escrutinio *económico – financiero*; pero tampoco el del sentido común.

Basta confrontar las causas de la cesación de pagos invocadas por Vicentin al inicio (y que el Informe General transcribe escrupulosamente a lo largo de casi veinte páginas) con las conclusiones que de manera muy genérica resume la Sindicatura en las págs. 68/70, para arribar a la conclusión que el alineamiento con el relato de la concursada ha sido absoluto e incondicional, mientras que los aspectos más críticos del asunto resultaron omitidos por completo.

Desde esta perspectiva, el Informe viene a ratificar, con creces, la necesidad en la designación de veedores, auditores forenses e interventores: está visto que no será a través de la Sindicatura, sino de los análisis y conclusiones provistos y que provean en el futuro dichos auxiliares designados por el Tribunal, que los acreedores podrán hallar explicaciones a un colapso financiero tan abrupto e intempestivo como el de Vicentin, que ocurrió casi de la noche a la mañana con el triste registro de ser uno de los defaults más grandes que registre la historia concursal argentina.

En verdad que es de lamentar que el Informe de la Sindicatura no esté ni por asomo a la altura de las circunstancias y exigencias de un caso de estas dimensiones y de esta complejidad.

Antes de ingresar de lleno en las observaciones, corresponde señalar que, en tanto órgano de información y consejo con

“amplias facultades”, y de realizar “cuanta otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su actuación”, la legitimación de este Comité para formular observaciones al Informe General resulta incuestionable.

Además, su “principal finalidad es la de fiscalizar el accionar de los restantes órganos y funcionarios, del deudor; de recoger información relativa al concurso y de verter opinión sobre actos trascendentes del proceso concursal, en defensa de los derechos de los acreedores” (Casadío Martínez Claudio Alfredo, LL. junio 2012, 260 – Russo, Oscar “Los comités de acreedores en la reciente reforma concursal, JA 1995-III-888)

Sin perjuicio de lo cual, es preciso dejar a salvo el derecho de cada uno de los miembros que suscriben de formular a su vez las observaciones que consideren menester, a título individual y en tanto acreedores reconocidos en el concurso.

II - SOBRE LAS CAUSAS DE LA CESACIÓN DE PAGOS:

1. Es sin duda en este Capítulo del Informe General donde con mayor claridad queda expuesto el análisis extremadamente parcial, tendenciosos y superficial efectuado por la Sindicatura sobre los motivos que llevaron a Vicentin a protagonizar uno de los defaults más gigantescos y abruptos que se recuerden en la historia concursal argentina.

Al abordar, en efecto, el Análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor en los términos del art. 39 inc. 1º de la L.C.Q., que abarca desde las páginas 2 a 70 del Informe (de entre las cuales 36 se dedican a meramente transcribir los motivos invocados por el

deudor al inicio y a un abordaje puramente teórico sobre clasificación de causas), la Sindicatura incurre en simplificaciones a tal punto llamativas que la sensación que deja su abordaje sobre tan sensible temática es que Vicentin ha sido una empresa castigada por circunstancias externas que han confluído todas sobre ella para impedirle el desempeño normal de sus negocios y generarle así la situación de crisis que culminó en su cesación de pagos.

No hay prácticamente, todo a lo largo del informe, referencia alguna en el Informe General que ponga de manifiesto la responsabilidad de la propia concursada y de sus administradores en la verdadera debacle que significó la cesación de pagos de Vicentin.

Cuando hay en el expediente elementos de sobra y contundentes, omitidos todos ellos por la Sindicatura en su consideración, para, cuanto menos, referirlos en el Informe General ponderando su incidencia sobre el desequilibrio económico experimentado por Vicentin de una manera tan abrupta, intempestiva y todavía inexplicada.

Por mayor empeño que se ponga en su lectura y análisis, lamentablemente las explicaciones a la cesación de pagos no pueden tampoco encontrarse en el Informe General, pese a que, como bien lo reconoce la propia Sindicatura, se trata de la *“pieza fundamental”* del procedimiento, *“la pieza más importante de todo el proceso”*, cuya finalidad persigue -nada menos- que *“el análisis y comprobación de las denuncias realizadas por el concursado en su demanda”*.

Con una ambigüedad y superficialidad sorprendentes, la Sindicatura afirma que *“Si bien nuestra normativa concursal no exige la corroboración por parte del órgano sindical de las causas denunciadas por la deudora – como es el caso de la legislación*

española -, es evidente que nos encontramos con causas típicamente externas, adquiridas, mixtas según la clasificación que propugnamos, que muestran dificultades que se fueron agravando con el transcurso del tiempo y alentaron la decisión de la presentación concursal con el objeto de determinar con fehaciencia el pasivo social y la intención de su saneamiento a través de este remedio” (pág. 28 del Informe).

Como se dijo, no hay ni un tímido intento por exponer la gran responsabilidad que cupo a la propia Vicentín -y a sus administradores- en el manejo de la empresa que culminó en la cesación de pagos.

2. Lo que se advierte también a simple vista es un liso y llano incumplimiento de la Sindicatura a la manda de V.S. en la resolución de fecha 21 de agosto de 2020, mediante la cual se autorizó la auditoría forense.

Viene al caso resumir algunos antecedentes de esa actuación:

(a) El Comité Provisorio de Control solicitó al Tribunal se disponga la realización de una auditoría forense, y en ese planto sostuvo -en lo que aquí interesa resaltar- que “... la auditoría forense que se propone excede con mucho las tareas propias inherentes a la función de la Sindicatura; y tampoco se confunde con las funciones de veeduría según resolución dictada por V.S. el pasado viernes 7 de agosto en estos mismos autos.

“En efecto, la auditoría forense es un proceso investigativo que se realiza con un enfoque eminentemente financiero y contable, y se orienta a obtener evidencia de potenciales acciones u omisiones fraudulentas o de errores que aparezcan como consecuencia un

impacto económico para la organización de que se trate. Se trabaja en la reconstrucción minuciosa y detallada de información comercial y contable, de modo tal de arribar a resultados confiables que se caracterizan por su comprobada trazabilidad dentro de los propios sistemas y documentación comercial y contable de la empresa, garantizándose así su carácter fidedigno.

“Existen hoy en día herramientas informáticas muy sofisticadas para llevar a cabo este cometido, que se orienta por lo general a detectar situaciones irregulares derivadas del desvío de fondos, manipulación de estados financieros, incumplimientos de políticas corporativas u otras situaciones que pudieran provocar un menoscabo patrimonial a la empresa (y, por añadidura, a sus acreedores).

“Se proveen a partir de este mecanismo elementos de juicio que sirven para una toma de decisiones fundada en hecho comprobados.

“Se trata de un trabajo especialmente técnico realizado por profesionales con formación en esa disciplina específica, quienes aplican técnicas y modernas herramientas tecnológicas (software y hardware) para el entrecruzamiento de datos que en este caso permitirían –entre muchas otras cosas, siendo este un listado meramente ejemplificativo- (i) detectar inconsistencias en operaciones comerciales; (ii) relevar el funcionamiento financiero del Grupo que tiene a Vicentin como eje principal, detectando la incidencia de recursos compartidos entre las sociedades que lo conforman así como también detalle y destino préstamos recibidos de terceros y también aquellos otorgados entre las sociedades del Grupo; (iii) analizar de manera profunda y exhaustiva todas las operaciones de Vicentin con las restantes compañías del Grupo, para determinar el flujo de efectivo neto entre el negocio principal de la

compañía y los negocios secundarios llevados a cabo por las restantes sociedades del Grupo; (iv) determinar el propósito y las actividades comerciales que lo originaron, en el caso de que, efectivamente, del análisis forense se identifique un flujo de efectivo neto significativo del negocio principal con destino a otras sociedades del Grupo; (v) analizar la venta de acciones de Renova S.A. (efectuada muy poco tiempo antes de la presentación en concurso) con particular foco en la aplicación de los fondos recibidos; (vi) efectuar un análisis comparativo de los Estados Contables correspondientes a los últimos tres ejercicios, comprensivo de los balances consolidados e individuales de cada una de las subsidiarias significativas; (vii) indagar en el alcance y modalidad con que el rubro “inventarios” se halla reflejado en los EE.CC. de Vicentin (en particular, si solo abarca granos que fueron facturados o pagados o si también incluye granos que no fueron facturados o pagados).

(...)

“En tanto director del procedimiento en los términos del art. 274 de la L.C.Q., que faculta a V.S. para dictar en dicho carácter “... todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias”, resulta por demás claro que el Tribunal cuenta con las facultades legales necesarias para ordenar la medida que se propone, inspirada en proveer a la totalidad de los acreedores –pero también al propio Tribunal y a la Sindicatura actuante- un cúmulo de información sumamente valiosa en cuanto a las causas que motivaron la estrepitosa crisis de Vicentin y en cuanto a cuál es realmente la situación actual de la empresa” (énfasis y subrayado añadidos).

Como se advierte, la solicitud misma de la auditoría forense estuvo inspirada en proveer a la Sindicatura elementos de juicio que contribuyeran a un mejor esclarecimiento de, justamente (y

entre otros aspectos), las causas del desequilibrio económico del deudor.

(b) En ocasión de resolver sobre la autorización de la auditoría forense en su resolución del 21 de agosto de 2020, V.S. lo hizo en la expresa inteligencia de que -en línea con la postulación del Comité Provisorio de Control- la herramienta habría de ser útil a la Sindicatura para abordar distintos puntos inherentes a su función, y en particular el atinente a las causas del desequilibrio económico.

Así, el Tribunal sostuvo que “... *frente a la utilidad que reportaría contar con dicha información calificada con relación a una empresa y sociedad concursada de dimensiones absolutamente extraordinarias, como así también la alternativa de brindar a la Sindicatura, dicho marco informativo que robustecerá notablemente a su actividad futura, considero razonable propiciar su realización*” (énfasis y subrayado añadidos).

“La auditoría propuesta, se revela como una actividad enmarcada en el rol del comité provisorio, que reportará información calificada para el desarrollo del proceso concursal, proveerá una base fáctica y científica para los deberes futuros de la sindicatura, brindará a los acreedores elementos decisorios relevantes, tanto para el presente (dado que muchos de ellos son potenciales originadores de materia prima que la empresa necesita), para eventuales observaciones de créditos dudosos, como también para el momento de acompañar la futura propuesta concordataria (Arts. 34, 260 LCQ)” (énfasis y subrayado añadidos).

“El trabajo que se realice en el marco de dicha auditoría, deberá producir además información relevante, no solo para establecer las causas del desequilibrio económico y cesación de pagos

confesada por la concursada con su pedido de apertura concursal (contribuyendo en tal sentido con el rol específico de la sindicatura sobre el particular), sino también para permitirnos conocer el actual estado de los negocios, activos, patrimonio y brindar pautas para avizorar el destino de la sociedad, sus empresas y negocios en el corto y mediano plazo” (énfasis y subrayado añadidos).

(c) Pese a la importancia de los datos aportados por la auditoría forense en sus distintos informes de avance presentados a la fecha (aspecto sobre el que se volverá luego en detalle), y al hecho de que V.S. -como surge de la transcripción efectuada supra- sin margen de duda proveyó favorablemente la auditoría forense en la expresa inteligencia de que la Sindicatura debía considerar sus informes y conclusiones para abordar los sensibles aspectos de análisis a su cargo (en particular el referido a las causas del desequilibrio patrimonial), no puede sino llamar poderosamente la atención el hecho de que, muy por el contrario, la Sindicatura en su Informe General hizo CASO OMISO TOTAL de la labor de la auditoría forense.

Tampoco consideró los informes de la veeduría ni de los interventores designados, cuando V.S. se encargó de dejar bien en claro que debía existir entre los distintos funcionarios y auxiliares del concurso un permanente trabajo de retroalimentación a partir de las distintas atribuciones y competencias otorgadas a los distintos funcionarios y auxiliares intervinientes.

Se advierte entonces que la Sindicatura no ha seguido para el análisis de un aspecto crucial como el de ponderar las causas del desequilibrio económico, una manda del Tribunal expedida en términos tan claros e inequívocos.

Sin duda que la omisión en que incurrió la Sindicatura de considerar cualquier otro elemento de los tantos y muy relevantes incorporados al expediente (informes de auditores forenses, de veedores e interventores), redundó en el análisis parcial, tendencioso y superficial que constituye el objeto de esta impugnación.

El hecho de que la Sindicatura se hubiese pronunciado en contra de la auditoría forense no es motivo para que obviara por completo su trabajo, en contra de las directivas -claras y expresas- dictadas por el Tribunal.

En este orden de ideas, conviene recordar que, en ocasión de sustanciarse la revocatoria de la concursada contra la decisión de V.S. que autorizó la auditoría forense, la Sindicatura negó terminantemente que las tareas de auditoría forense excedieran su función, señalando incluso que “... *no tuvimos mayores dificultades para obtener la información que solicitamos*” y que “*también estamos analizando y preparando la información necesaria para la elaboración del Informe General (donde se expresará cuáles fueron las causas del desequilibrio económico de Vicentín, los hechos y circunstancias pormenorizadas que la llevaron a la insolvencia...)*”.

Como se verá, no hay sobre el punto ningún análisis pormenorizado, sino un abordaje confuso y superficial, que no pasa en la identificación de las causas de una invocación ambigua de los lugares comunes por donde transitó la explicación de la propia deudora (sequía, la incertidumbre de las elecciones primarias de agosto de 2019, las condiciones del mercado internacional).

Sin desdeñar de esos factores, que habrán tenido su grado de incidencia, pretender con base únicamente en ellos explicar semejante colapso financiero ocurrido prácticamente de la noche a la

mañana es de un simplismo que nada tiene que ver con el análisis pormenorizado que la Sindicatura comprometió cuando se opuso a que se realizase la auditoría forense por entender que ella estaba en condiciones de cumplir ese trabajo, el cual consideró que no excedía de sus funciones y estaba dentro de las tareas de un órgano sindical (*“Por ello -dijo la Sindicatura en aquella oportunidad- no es cierto que las funciones asignadas a los auditores sean útiles para este Órgano o excedan con mucho a nuestra función”*; alegando además que *“Las funciones que se le otorgan a los auditores se superponen con las que la ley impone a este Órgano, no necesitando la sindicatura colaboración para realizarla”*).

Pero, de nuevo, al margen de cuál hubiera sido la postura de la sindicatura sobre la realización de la auditoría forense, lo cierto y lo concreto es que la instrucción del Tribunal en su resolución del 21 de agosto de 2020, al autorizarla, fue lo suficientemente clara.

Más aún, al resolver dicho recurso de revocatoria, el Tribunal hizo también algunas consideraciones adicionales que merecen resaltarse y dejan aún más en evidencia lo inexplicable de que la Sindicatura haya obviado por completo lo actuado por los auditores forenses.

En ese sentido (resolución del 16/10/2020), el Tribunal sostuvo que *“la auditoría forense se revela como un medio proporcional y adecuado que, no por desconocido en la órbita concursal, debe ser estigmatizado o calificado como una herramienta impropia para el proceso concursal”*.

Y, atendiendo a la inquietud de la Sindicatura sobre la superposición de tareas, sostuvo el Tribunal que *“... para evitar superposiciones en cuanto a los roles y funciones (tema invocado por la concursada en su planteo recursivo), se dispuso que la auditoría forense*

se desarrolle conforme a un cronograma de trabajo el cual ha sido presentado en este expediente (fs. 5366, cuerpo 28, cargo 6329, 14/9/2020). Asimismo, los veedores-controladores, han sometido su accionar a las pautas de su designación, obrantes en la resolución de fecha 7/8/2020 (fs. 4314, cuerpo 22, auto N° 295). Por su parte, la sindicatura cuenta con su propio cronograma de deberes y facultades que, conjuntamente con la propia ley concursal y con los requerimientos efectuados en cada oportunidad por el Juzgado, delimitan su rango de actuación en este proceso”.

Y destacó, por fin, “el deber de coordinación, sinergia y retroalimentación que deberá reinar en la ejecución de aquellos trabajos profesionales previstos”.

A la luz del contenido del Informe Individual que es aquí objeto de impugnación, queda refrendado que la auditoría forense no solo era necesaria, sino incluso indispensable, para que los sujetos relevantes de este concurso (en especial los acreedores y el Tribunal) puedan conocer las reales causas del desequilibrio económico de Vicentin.

A la vez que queda esclarecido también el incumplimiento por parte de la Sindicatura de la manda del Tribunal, ya que se afianzó en su negativa y prejuicio sobre la auditoría forense en lugar de acatar la instrucción de V.S. en cuanto a que debía existir un trabajo de sinergia y retroalimentación al momento de analizar y expedirse sobre cuestiones tan relevantes como las que deben abordarse en el Informe General (en particular, la vinculada con las causas del desequilibrio económico).

Este incumplimiento de la Sindicatura a sus deberes en los términos indicados por el Tribunal ya de por sí desmerece

mucho el contenido y conclusiones de su informe.

3. Existe una realidad contable objetiva de suma relevancia que no fue considerada de ninguna manera y ni mencionada siquiera por la Sindicatura en su Informe General.

Según informes trimestrales emanados de la propia Vicentin, la empresa exhibía, al 31 de julio de 2019, una posición corriente (activo corriente menos pasivo corriente) de dólares estadounidenses quinientos un millones (USD 501.000.000) de superávit y un capital de trabajo (bienes de cambio más créditos comerciales y otros, menos pasivos comerciales y otros) también superavitario, de dólares estadounidenses novecientos ochenta y ocho millones (USD 988.000.000).

Sin embargo, esa aparente solvencia contrasta de manera escandalosa con la información expuesta también por la propia Vicentin en ocasión de presentarse en concurso preventivo.

De esa presentación inicial, se extrae que:

- ✓ **Sus bienes de cambio pasaron de USD 714 millones en julio de 2019 a USD 10 millones en febrero 2020 (USD 700 millones de diferencia).**
- ✓ **Los créditos por ventas pasaron de USD 252 millones a USD70 millones en febrero 2020 (más de USD 180 millones de diferencia).**
- ✓ **La deuda con proveedores de materia prima aumentó de USD 10 millones en julio de 2019 a casi USD 417 millones en febrero**

de 2020 (más de US\$ 400 millones de diferencia).

Es importante destacar que no se trata la información aquí expuesta de apreciaciones subjetivas, sino, por el contrario, de información objetiva que emerge de los estados financieros trimestrales emitidos por la sociedad concursada y de los datos por ella expuestos en su presentación concursal.

El Comité Provisorio de Control, en ocasión de responder el recurso intentado por Vicentin contra la auditoría forense, puso esta situación de relieve, al señalar con respecto a las razones invocadas por Vicentin para explicar su cesación de pagos, que

“En ningún caso pasaron de alegaciones imprecisas, superficiales y vagas, un cúmulo de lugares comunes (el proceso electoral, la inflación, la incertidumbre, etc.) demasiado ambiguas para brindar claridad a nadie sobre un colapso financiero de estas dimensiones (sin duda de los más grandes que se registran en la historia concursal de nuestro país), en un escenario donde hasta muy pocos meses antes la empresa se presentaba frente a terceros (bancos nacionales e internacionales incluidos) exhibiendo una solvencia que abruptamente desapareció y la condujo casi que sin solución de continuidad de la robustez económica y financiera a la cesación de pagos” (subrayado añadido).

Desde luego que la Sindicatura contaba con los informes financieros trimestrales emitidos por Vicentin en favor de entidades prestamistas; así como también contaba con la querella penal deducida por bancos internacionales y, desde luego, conocía la preocupación del Comité de Control expresada más arriba, desde que se formuló por escrito en este expediente y en el marco de una discusión de

la que ella formaba parte (la articulación recursiva de Vicentin contra la autorización de la auditoría forense).

Pero sobre todo esto el Informe General no explica nada.

Se limita a validar como causa del desequilibrio económico aquel “*cúmulo de lugares comunes*” que el Comité de Acreedores denunció en su oportunidad, sin adentrarse en la gran complejidad de este asunto, que excede con mucho, como lo hizo notar en varias oportunidades el Tribunal, la de un proceso concursal común y corriente.

Incluso cuando brinda explicaciones sobre esos “*lugares comunes*” incurre el Informe General en importantes omisiones y deficiencias: veamos el caso de la sequía de 2018 y los mayores costos que supuso para Vicentin, lo cual -en alineamiento total siempre con la versión de la concursada al inicio- aparece referido por la Sindicatura como una causa relevante que explicaría el desequilibrio económico.

En uno de los párrafos, el Informe destaca a las condiciones climáticas (con particular foco en la sequía de 2018) como “*una causal ligada a costos extraordinarios que debieron afrontarse para cumplir con obligaciones preexistentes (...) En ese contexto, se afirma que la concursada debió recurrir a importaciones temporarias de USA, Brasil y Paraguay, con incrementos de gastos relacionados con las mismas y dificultades logísticas...*”.

Solo sabemos que el sobrecosto logístico superó las ventajas resultantes del mejor rendimiento del cereal importado.

Sin embargo, no cuantifica la Sindicatura el costo extra generado por la logística internacional asociada a la soja importada. Tampoco cuantifica el costo financiero extra generado por la

necesidad de financiar la materia prima en viaje.

De hecho, el Informe no describe las condiciones de la citada importación en términos de precio de la materia prima, condición de pago, plazo de entrega, etc.

Otra vez, como a lo largo de todo el Informe, los acreedores quedamos a merced de referencias vagas que no nos permiten arribar a ninguna conclusión.

Por otro lado, más allá de las deficiencias indicadas, nos surgen a los acreedores preguntas muy básicas que la Sindicatura debió hacerse como referencia para brindar información ilustrativa y no lo hizo.

Por ejemplo, ¿fue la de 2018 la primera sequía que debió afrontar Vicentin a lo largo de su dilatada historia?

¿Cuál fue el déficit de originación si se compara la de 2018 con la sequía anterior?

¿Cómo se resolvió el problema en otras situaciones previas similares de sequía o conflictos climáticos?

¿Contaba Vicentin con un plan de contingencias, habida cuenta que los riesgos climáticos son moneda corriente en esta industria?

¿Pudo la concursada anticipar las dificultades que iban a enfrentar los buques de ultramar a la hora de descargar el cereal?

Nadie mejor que la propia Vicentin para determinar las capacidades operativas de sus puertos. ¿Qué hicieron los competidores para resolver la falta de provisión doméstica?

Otra vez incurre la Sindicatura, desde una pasmosa superficialidad de análisis, en depositar todas las culpas en un

tercero (la naturaleza en este caso), bajo el paraguas ahora del cambio climático.

Era de esperar que la Sindicatura no incurriera en las mismas explicaciones ambiguas y superficiales de la concursada; si algo claramente deja en claro el contenido del Informe General, es el acierto del Comité de Acreedores en postular distintas instancias de información y control (veeduría, auditoría forense, intervención), así como del Tribunal en adoptarlas y darles curso.

También el Informe General (en una metodología por demás inapropiada) entremezcla causas de la cesación de pagos con análisis prospectivos de muy dudosa pertinencia y exactitud.

No es propio de la explicación de las causas que motivaron el desequilibrio económico trazar pronósticos.

Por ello es incomprensible que la Sindicatura, aludiendo a *“La ubicación geográfica del centro productivo”*, concluya en que *“... esa ubicación, insistimos, estratégica, confiere a la Compañía una sinergia de alto poder económico y financiero... Esa sinergia, deberá, por tanto, convertirse en un factor de especial evaluación al momento de otorgar un valor a la compañía, ahora insolvente”*.

En primer lugar, como se dijo, no se comprende a qué viene este párrafo dentro del capítulo donde se abordan las causas del desequilibrio económico (lo cual es revelador también de los grandes problemas de ilación que tiene también el Informe General, provocando de ese modo un mayor grado de incomprensión para los acreedores).

Pero, en cualquier caso, y más allá de esa cuestión metodológica, lo cierto y lo concreto es que, desde la apertura misma del concurso preventivo la Compañía demostró una total incapacidad para recuperar su capacidad de originación, de lo que da

cuenta el nivel de operación que mantiene actualmente limitado a un conjunto de contratos de facón de corto plazo.

A propósito, ni una mención existe en el informe sobre la situación de Díaz & Forti y su proceso de concurso preventivo, que afectó de manera directa a Vicentin.

Para poder hablar de sinergias resulta imprescindible que la Compañía supere su estado de insolvencia actual, de donde se sigue que el aserto transcrito de la Sindicatura no es más que una expresión voluntarista (y por ende carente de todo rigor técnico) que en nada contribuya a comprender las causas profundas de la cesación de pagos de Vicentin.

4. El CASO OMISO TOTAL que, contrariando la orden de V.S., hizo la Sindicatura sobre la información suministrada por los auditores forenses, queda de manifiesto muy especialmente a partir del Tercer Informe de Avance presentado por estos últimos, dada la enorme relevancia de los datos y la información allí vertida.

Y decimos que es particularmente importante porque los auditores forenses formularon, desde la perspectiva de su propia disciplina, un *"ANÁLISIS SOBRE LAS POSIBLES RAZONES DEL ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS"*; la Sindicatura puede compartirlo o no (y si no lo comparte debe justificar por qué), pero lo que no puede es ignorar por completo ese sustancioso cúmulo de información científica, objetiva y trazable -propia del método de auditoría forense, que es una disciplina muy diferente a la de una sindicatura concursal-, en claro incumplimiento de la manda del 21 de agosto de 2020 que la instó a valerse de esta información.

Justamente porque el Tribunal entendió (a

propuesta del Comité de Control) que la disciplina forense no era una sustitución o un obstáculo a las tareas sindicales, es que autorizó su realización e instruyó a los Síndicos para que se *nutrieran* de dicha información, de manera tal que los ayudara en la comprensión de múltiples aspectos cuya complejidad -como ya se dijo- excedía en mucho la de un concurso común y corriente.

No en beneficio (aunque también) de los propios síndicos, sino fundamentalmente de los acreedores y del propio Tribunal.

Por qué la Sindicatura prefirió obviar todo eso es cuestión que solamente ella podrá explicar al Tribunal. Pero lo cierto es que la información relevante omitida se encuentra agregada desde hace ya tiempo en el propio expediente.

Los auditores forenses analizaron los Estados de situación patrimonial consolidados bajo AR GAAP al 31 de octubre de 2017, 2018 y 2019 y los Estados de situación patrimonial consolidados bajo I.F.R.S al 31 de octubre de 2017, 2018 y al 31 de julio 2019 de Vicentin.

Lo graficaron del siguiente modo en su Tercer Informe de Avance:

Estado de situación patrimonial - Consolidado Vicentín SAIC en AR GAAP e IFRS en USD

KUSD	Consolidados AR GAAP			Consolidado IFRS			Var.	Ref
	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Oct 17	Oct 18	Jul 19	Jul 19/Oct 19	
Activo corriente								
Disponibilidades	13.601	59.417	22.262	4.551	37.103	33.033	(7%)	
Cuentas por cobrar	233.047	360.406	262.480	215.119	342.246	282.602	4%	
Otras cuentas por cobrar	89.075	74.248	94.882	89.406	112.260	128.190	(26%)	
Bienes de cambio	522.015	674.025	155.064	509.204	629.845	714.326	(78%)	A
	857.798	1.159.097	534.693	818.278	1.121.454	1.159.101	(52%)	
Activo no corriente								
Otras cuentas por cobrar	64.505	43.619	9.024	62.068	42.061	33.767	(71%)	
Bienes de uso	500.601	934.067	922.843	422.806	437.277	426.325	115%	
Inversiones	6.006	8.545	134.043	219.319	263.900	257.915	(48%)	
Otros activos	10.918	5.708	263.974	15.083	-	-	n/a	
	672.031	992.841	1.330.784	709.134	733.228	719.992	85%	
Activo total	1.529.829	2.151.937	1.865.477	1.527.412	1.854.682	1.879.093	1%	
Pasivo corriente								
Deudas com./ Soc y fiscales	147.554	122.896	680.757	151.615	125.801	106.571	544%	B
Deudas financieras	412.436	609.689	664.636	401.746	671.085	511.719	30%	
	559.990	732.485	1.345.392	553.361	807.886	618.290	110%	
Pasivo no corriente								
Deudas com./ Soc y fiscales	141.880	176.427	94.964	17.229	62.872	30.008	217%	
Deudas financieras	460.362	665.309	713.402	342.143	488.842	575.156	24%	
	602.242	861.728	808.394	419.372	541.714	605.166	34%	
Total Pasivo	1.162.231	1.594.213	2.153.786	972.733	1.239.400	1.223.456	77%	
Patrimonio neto	367.597	567.724	(294.309)	554.679	615.282	655.637	(148%)	
Total Pasivo + PN	1.529.829	2.151.937	1.865.477	1.527.412	1.854.682	1.879.093	1%	

Fuente: Estados contables en IFRS al 31/10/2017, 31/10/2018 y en forma local al 31/10/2018.

Desde esa información como punto de partida, focalizaron en el trimestre julio/ octubre de 2019, “... observando que en el transcurso de estos tres meses es donde se reflejan las mayores variaciones...”

También afirman que los EE.CC. anuales al 31 de octubre de 2019 “muestran diferencias considerables respecto de los presentados en 2018, lo cual sugiere que estas diferencias se habrían generado durante el último trimestre”.

Y esbozan sobre este punto una conclusión terminante, en el siguiente sentido:

“Dentro de las variaciones más significativas del último trimestre observamos una pérdida del Patrimonio Neto del 148%, lo cual representa aproximadamente una reducción de unos USD909,9 millones en tan solo tres meses. Esta disminución se encuentra justificada con la caída de los inventarios y el aumento en las deudas comerciales”.

Lo cual grafican del siguiente modo:

KUSD	AR GAAP	IFRS	Var.	Var.
	Oct 19	Jul 19	Jul 19/oct 19	19/oct 19
Patrimonio neto	(294.309)	615.637	(909.946)	(146%)

5. Lo recién expuesto se vincula con dos conceptos centrales, que no han sido ni siquiera mencionados por la Sindicatura en su Informe General.

Uno es el de los **inventarios**.

Otro es el de las **deudas comerciales**.

Sostienen, en efecto, los auditores forenses, sobre la pérdida de USD 909, 9 millones de patrimonio neto en tal solo el trimestre julio/ octubre de 2019, que *“Esta disminución se encuentra justificada con la caída de los inventarios y el aumento en las deudas comerciales”*.

Como se verá, se trata de conceptos que se encuentran inescindiblemente ligados entre sí.

Tocante a los **inventarios**, cabe recordar que según los EE.CC. del ejercicio cerrado al 31/10/2018, que fueron auditados por KPMG, Vicentín había fijado su valor en la suma de USD 630 millones, a la vez que expresado una deuda con sus proveedores de solo USD 36 millones.

En tanto que en el último informe trimestral exhibido a las instituciones bancarias (cerrado al 31/7/2019), previo a la presentación en concurso, el valor de los inventarios propios era de supuestamente de USD 714 millones y la deuda con los proveedores de granos nada más que de USD 10 millones.

Ya se señaló más arriba el inexplicable

contraste con la información vertida por la concursada en su presentación inicial al Tribunal, donde Vicentin informó inventarios por solo USD 10 millones y deudas pendientes con proveedores por USD 417 millones.

¿Puede ser, es explicable o comprensible desde algún punto de vista que semejantes variaciones no le hayan llamado a la Sindicatura mínimamente la atención, al punto de no abordar ni mencionar siquiera estas cuestiones en su Informe General que ella misma definió como “... la pieza más importante de todo el proceso, que permite conocer el pasado, el presente y el futuro de la concursada”?

Ni la *sequía* del año 2018, ni *las condiciones generales del mercado*, ni *los mecanismos de financiación de la actividad productiva* -ni tampoco ninguna otra de las causas que ensaya la Sindicatura para explicar la cesación de pagos- alcanzan, ni en sí mismas ni consideradas en su conjunto, para explicar este enorme “**agujero negro**” semejante en los sucesivos EE.CC. de la concursada, y sobre el cual era esperable -y exigible- que la Sindicatura se expidiera de manera circunstanciada.

Los elementos para hacerlo los tenía al alcance de la mano, en el propio expediente principal del concurso preventivo de Vicentin, pero prefirió omitir sobre el punto toda consideración.

Los auditores, en su ejercicio de recorrer las posibles razones del estado de cesación de pagos, toman en cuenta las variaciones entre el último informe emitido por Vicentin al 31 de julio de 2019 bajo las normas IFRS y su comparación con el balance (ya firmado por una nueva firma auditora) por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2019.

El informe es muy ilustrativo a la hora de

describir el ciclo de producción y la manera de registración de las deudas comerciales de la empresa, en especial en relación con los contratos con la modalidad “precios a fijar”.

Y allí se dice con claridad que la política adoptada por Vicentin consistía en que *“si el contrato de compraventa es con precio a fijar, no se registra en la cuenta del proveedor hasta que éste fije precio”* (ver hoja 11 del informe). Luego de ello, el informe analiza en concreto este modo de registración contable adoptado por Vicentin y concluye que:

“La contabilización de estas operaciones debe reflejar que esta mercadería ha dejado de pertenecer al vendedor y que el adquirente tiene un pasivo con el mismo. El stock adquirido debe ser reflejado en el rubro Bienes de Cambio y la deuda dentro del pasivo, en el rubro Proveedores.

“Cuando dicha mercadería sale de stock por venta, deja de ser activo y pasa a ser Costo de la mercadería vendida. El pasivo solo desaparece cuando es extinguido por alguna de las formas de cancelación de las obligaciones.

“Si por razones operativas fuese más práctico registrar las operaciones al momento de la fijación de precio, podría hacerse siempre y cuando, al cierre del ejercicio mensual, trimestral o anual, se contabilizara el stock en el activo y el consabido pasivo de las operaciones pendientes, o el impacto, si se hubiera vendido la mercadería, en el costo del producto vendido”.

Además de lo anterior, los auditores forenses hicieron lo siguiente:

Examinaron los estados contables por los ejercicios cerrados al 31/10/2017 y 31/10/2018 realizados bajo la norma

contable IFRS (también auditados por KPMG), y compararon los pasivos comerciales allí identificados con los expuestos en el balance cerrado al 31/10/2019.

A falta de la documentación e información que razonablemente debieron haber provisto tanto las autoridades de Vicentin como los auditores de KPMG, los auditores forenses que actúan en el Concurso circularizaron pedidos de información a los veinte proveedores de granos más significativos, considerando el volumen de operaciones con Vicentin. Ello, con el propósito de poder validar el pasivo granario al cierre de cada ejercicio.

Por otro lado, compararon las cifras expuestas como pasivos en los ejercicios 2017 y 2018, con las cifras consignadas en el ejercicio cerrado al 31/10/2019.

Y allí, en el rubro “proveedores de materias primas”, es donde los auditores identificaron un incremento de 1.664% en el último período.

6. En un completo alineamiento con la postura de la concursada expuesta en la solicitud de concurso preventivo, la Sindicatura considera que ha sido un factor determinante para el desequilibrio económico de Vicentin la incertidumbre generada como consecuencia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del mes de agosto de 2019.

Dice a este respecto (v. pág. 42 del Informe General) que:

“Refrescando, entonces nuestra memoria, no podemos desconocer que a partir de las elecciones Primarias Abiertas Obligatorias (PASO) en agosto/2019, se sucedieron en el país una serie

de circunstancias económicas y financieras de inocultable influencia en las actividades económicas en general, entre las cuales podemos citar: (i) devaluación de la moneda argentina; (ii) aumento del riesgo país – vemos en la requisitoria a las entidades financieras que muchas de ellas consignan el “country risk” como uno de los elementos a tener en cuenta, - ver página 31 Anexo 4, Capítulo I, Requisitoria de Información y Documentación a Entidades Financieras, Banco Bradesco -; (iii) fuerte caída de los depósitos en dólares estadounidenses; (iv) ansiedad generalizada en los mercados, particularmente el referido a las actividades agropecuarias por la posibilidad de enfrenar medidas fiscales que las afectarían, entre otros”.

Y concluye en que “... el común denominador de las circunstancias descriptas es la incertidumbre, es decir la falta de certeza sobre el devenir económico y financiero”.

Agrega también en su esquema de conclusiones que existió “Una indisimulada acción de los productores de granos tendiente a fijar precios en forma anticipada y, de esa forma, anticiparse a posibles cambios en el régimen de retenciones fiscales que aparecían como medidas tendientes a reforzar las alicaídas arcas estatales. A partir de las elecciones PASO fueron incesantes las versiones en ese sentido” (página 69).

De haber seguido la Sindicatura la manda del Tribunal en su ya varias veces citada resolución del 21 de agosto de 2020, y analizado lo manifestado a este respecto en el Tercer Informe de Avance de los auditores forenses, habría tenido muy sólidos elementos para, cuanto menos, poner en duda la real incidencia que ese hito tuvo en la cesación de pagos de Vicentin.

Con este piso de marcha, partiendo de la base de

que, como ya se dijo, no se trató aquí de una simple *cesación de pagos*, sino de uno de los *defaults* más abruptos, intempestivos y escandalosos que se recuerden en la (ya de por sí muy profusa) historia concursal argentina, lo que cabe preguntarse es si, más allá de lo discursivo, de la simpleza de pretender explicar el default de Vicentin por los efectos de las PASO como una concausa de relevancia, ese evento tuvo realmente el efecto que la concursada y la Sindicatura le asignan.

La Sindicatura no, pero los auditores forenses sí analizaron esa cuestión con un relevamiento y entrecruzamiento de datos emanados de la propia contabilidad de la concursada y empresas proveedores de granos (a quienes pidieron información).

En concreto, los auditores examinaron la razón ofrecida por Vicentin como causa de su descalabro económico. Esto es, que luego de las PASO de agosto de 2019 los productores habían concurrido masivamente a “*fijar precio*” en aquellas operaciones de venta de granos bajo la modalidad “*precios a fijar*”.

En su análisis, tomaron en cuenta el período agosto a octubre de 2019, para identificar la magnitud de esas “*fijaciones de precio*”, en comparación con las fijaciones de precio de iguales meses, pero ya del año 2018.

La conclusión fue que esas “*fijaciones de precio*” de 2019, comparándolas con las “*fijaciones de precio*” de iguales meses de 2018, habían significado un incremento de sólo el 121%.

O sea, un incremento sustantivamente inferior a la proporción en que durante ese mismo período se incrementó la deuda de Vicentin con los proveedores de materia prima.

El paso siguiente fue ya hacer el comparativo de

las toneladas de granos fijadas entre agosto/octubre de 2018, por un lado, y agosto/octubre de 2019, por otro.

Aquí el incremento es del 242% en dólares estadounidenses respecto de igual período, señalándose esta muy importante conclusión: los contratos con precio a fijar a julio de 2019, que ascenderían a un total de USD 636,1 millones, *“no se encontrarían registrados como pasivos comerciales al cierre del trimestral bajo IFRS, presentado en esa fecha”*.

Al mismo tiempo, los forenses explicaron que los pasivos comerciales expuestos al 31 de julio de 2019 (último informe trimestral presentado por Vicentin a las instituciones financieras según normas IFRS), totalizaron USD 106,6 millones y, **en solo tres meses, esos pasivos aumentaron USD 696, 8 millones, extrayendo entonces como conclusión que:**

“Semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compraventa de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el Pasivo de los años anteriores” (énfasis añadido).

Como se advierte, es de un facilismo inadmisible pregonar los efectos de las PASO como causa de la cesación de pagos sin realizar un análisis sobre sus reales implicancias a la luz de datos concretos.

Máxime si se tiene en cuenta que el factor PASO fue al que más acudió la propia deudora en ocasión de brindar ella misma las explicaciones sobre las causas de su cesación de pagos.

En este sentido, se lee en el Tercer Informe de avance de los auditores forenses: *“Se han realizado diversas consultas a la Concursada sobre los aumentos de los pasivos comerciales,*

específicamente proveedores de materias primas. La respuesta dominante fue que, debido al resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias realizadas en agosto del año 2019, recibieron un incremento sustancial de solicitudes de fijación de precio de sus proveedores, en razón de las incertidumbres relacionadas con eventuales cambios en la política cambiaria e impositiva aplicable. La Concursada también ha invocado esta causa como el principal origen de la crisis financiera que derivó en el pedido de concurso de acreedores del 10 de febrero de 2020”.

Por lo demás, no entendemos la expresión, claramente peyorativa, que refiere la Sindicatura en sus conclusiones sobre “*Una indisimulada acción de los productores de granos tendiente a fijar precios en forma anticipada*”.

En efecto: ¿por qué los productores habrían de “disimular” su decisión de fijar precios anticipando que podría establecerse en el futuro un régimen menos favorable para ellos?

El derecho les asistía por la simple razón de que previamente habían firmado con la Compañía una venta bajo la modalidad “con precio a fijar”. No advertimos espacio para la queja. En todo caso, la Compañía siguió una estrategia imprudente que la dejó expuesta a una eventual “corrida” de los productores, que al mismo tiempo pone en evidencia un esquema de control de riesgos improvisado y extremadamente débil y carente de todo profesionalismo.

Además, la expresión “*fijar precios en forma anticipada*” resulta una contradicción en sí misma. La modalidad de venta con precio a fijar supone, por definición (y esa es justamente su razón de ser) un diferimiento en la determinación del precio en una fecha posterior a la concertación de la venta, lo cual hace imposible que el

productor determine el precio en forma “anticipada”, como postula la Sindicatura.

L Lo expuesto en los apartados previos nos conduce de lleno a la cuestión de la **registración contable de Vicentin**, un tema sensible por demás.

También en este punto la posición de la Sindicatura en su Informe es susceptible de crítica e impugnación severas. Fundamentalmente, por omisión de indagar en los aspectos críticos sobre los cuales tenía a su total disposición (en el propio expediente) elementos de juicio para hacerlo.

Para tener en claro de dónde partimos en la observación de este punto, conviene transcribir lo que afirma la Sindicatura en las págs. 60/61 del Informe General:

“Como parte de esta cuestión es necesario, también, hacer una referencia explícita sobre los sistemas de registración e información, y las capacidades tecnológicas (IT), que la Sociedad ha dispuesto para alcanzar un nivel adecuado y oportuno de información que permita al Directorio y a los niveles gerenciales la adopción de las acciones y medidas más convenientes en función de las pautas de producción, comercialización, financiación, recursos humanos, etc., que previamente se hubieran establecido.

“En ese sentido debemos informar, con contundencia, que las registraciones contables que hemos solicitado en múltiples oportunidades como consecuencia de la actividad propia del proceso de verificación de créditos y para la elaboración de este Informe, siempre ha sido brindada para el cumplimiento de nuestro deber, como asimismo el acceso a la documentación respaldatoria de esas

registrações em um todo de acordo com as disposições legais na matéria: "...debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudora. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva.

"Destacamos particularmente esta circunstancia, en contraste con algunos informes – Sigen Informe producido en oportunidad de la intervención dispuesta por el PEN – pues, reiteramos, en todo momento y circunstancia hemos podido hacer las comprobaciones requeridas, obtener la documentación pertinente y sus registros derivadas".

No está claro, porque no lo explica, qué tipo de información solicitó la Sindicatura a la concursada como para afirmar, "con contundencia", que siempre le fue provista cualquier registro contable que solicitara.

Es cierto, como se lee en el Informe, que "el síndico debe realizar su estudio más allá de los datos que arroje la contabilidad y ponderar tanto los factores objetivos, externos al quehacer del deudor, como los subjetivos reflejados en una deficiente organización o incapacidad operativa del deudor. En definitiva, requiere que el síndico no se atenga a la intención exclusiva de la contabilidad, sino mucho más para que mediante el examen detenido y sobre todo debidamente fundado, llegue a conclusiones que permitan a los acreedores y al juez tomar conocimiento cierto y preciso sobre los motivos a los que nos venimos refiriendo".

Desde una perspectiva teórica no puede disentirse con la noción de que el análisis de la sindicatura no debe

circunscribirse meramente a una revisión contable, sino que debe hacerse extensivo a otras causales que definieron la desventura de la concursada, y cuya superación determinará su destino.

Sin embargo, esta concepción no puede ser interpretada en el sentido de subestimar la importancia de la contabilidad y las registraciones contables -situación que a nuestro juicio se desprende de la lectura del Informe General-, sobre todo considerando, como ocurre en el caso que nos ocupa, los fuertes, severos y muy fundados cuestionamientos que los acreedores han formulado respecto de las prácticas contables empleadas por la concursada, y que dieron paso al inicio de acciones penales e incluso a la designación de una auditoría forense, lo cual constituye un hecho inédito que no reconoce precedentes en la historia concursal doméstica.

Para dar una idea de la gravedad de la situación, a la fecha del presente escrito la auditoría forense no ha podido reconstruir desde un punto de vista contable la forma en que se registraban en el libro diario ciertas transacciones que integraban la operatoria habitual de la concursada, lo cual enciende un sinnúmero de alarmas que ameritan especial atención y pone de manifiesto, una vez más, la enorme superficialidad y carencia total de rigor técnico en el análisis efectuado por la Sindicatura en su Informe General.

Es claro que no pudo la Sindicatura soslayar sobre este punto, una vez más, lo manifestado por los auditores forenses en su Tercer Informe de Avance.

Ya hemos citado más arriba la drástica conclusión a la que arribaron los auditores forenses en el sentido de que durante un período nada más que de tres meses (julio a octubre de 2019) los pasivos comerciales de Vicentin se incrementaron de USD 106,6

millones a USD 696,8 millones.

Y que *“Semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compraventa de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el Pasivo de los años anteriores”* (énfasis añadido).

Es imposible de explicar que, con el reporte de los auditores forenses a la vista, a la Sindicatura no le haya surgido ni siquiera la inquietud de indagar en estas cuestiones, y se limitara nada más que a poco menos que felicitar a Vicentin por proveerle la información solicitada.

Pero los auditores forenses van todavía más allá, indagaron con profundidad y seriedad en el *quid* de la cuestión, omitido en cambio por completo en el Informe General de la Sindicatura: **¿cómo registraba contablemente Vicentin los inventarios, esto es, los granos que recibía de los productores?**

En primer lugar, señalan los auditores lo siguiente:

“La respuesta que obtuvimos cuando consultamos cómo registraban las compras de granos con precio a fijar (y sus pasivos correspondientes) y el costo de producción, fue que el costo de ventas se calculaba por diferencia de inventarios. Solicitamos documentación sobre los inventarios realizados que aún está pendiente de recepción. Va de suyo que este punto – central respecto de la interpretación de la información financiera que pudieran realizar los usuarios – merece que la Concursada acceda a brindar una explicación que ayude a que este Cuerpo de Auditores Forenses a reconstruir toda la historia relativa a los stocks, inventarios, pasivos y otros asuntos relacionados con este punto”.

Por de pronto ya se advierte que, cuando se le requiere información sensible, tendiente a poner al descubierto su política de registración contable, Vicentin no se muestra igual de abierta y cooperante como sí lo estuvo con la Sindicatura, quien ninguna indagación efectuó sobre estos puntos sensibles y mucho más importantes para dar con las causas del desequilibrio económico que la sequía, las condiciones del mercado internacional u otras generalidades sin sustancia en las que el Informe General sí abunda.

Como la concursada no proveyó la información sensible necesaria para dar con una explicación científica, objetiva y trazable sobre su política de registración contable en materia de inventarios, fue que los auditores forenses -en ejercicio de las facultades informativas con que los invistió el Tribunal- *“A los efectos de validar los saldos de los estados contables mencionados en el cuadro anterior se ha solicitado a una muestra de proveedores relevantes que aporten información detallada sobre sus acreencias con la Concursada, a determinadas fechas”*.

La siguiente table muestra los proveedores seleccionados por los auditores para la reconstrucción de información.

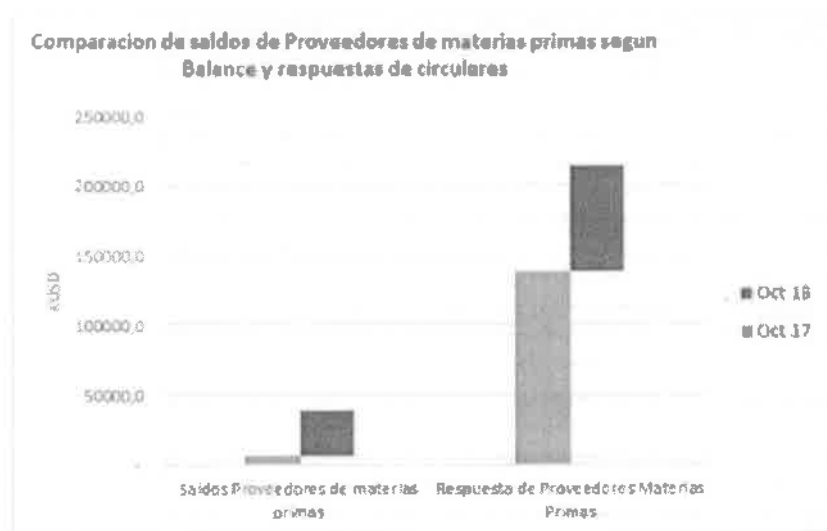
NOMBRE
ASOCIACION DE COOP. ARG.COOP LTDA
COMMODITIES S.A.
GRASSI S.A.
BLD AGRO S.A.
UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP.LTDA.
GYT PLUS S.A.
FYO ACOPIO S.A.
A.F.A. S.C.L. -ROSARI
CEREALES DEC SOCIEDAD ANONIMA
MOLINO CANUELAS SACIFIA
MATESUR S.A.
TOMAS HNOS. Y CIA. S.
ARGENTRADING SA
VILLARRICA S.R.L.
AGRONEGOCIOS JEWELL S
JOSE COSTANTINI S.A.
BURATOVICH HNOS. S.A.
CARGILL S.A.C.I.
BUYATTI S.A.I.C.A.
PROFERTIL S.A.

Asimismo, “A efectos de conciliar la información proporcionada por los Proveedores de la Concursada, se solicitaron saldos a las fechas antedichas de cada proveedor que surjan de los registros de la Concursada, Oleaginosa San Lorenzo S.A. y Renova S.A.”

El resultado de dicho análisis llevado a cabo por los auditores forenses fue que “podemos observar que para los ejercicios 2017 y 2018, los montos declarados por los proveedores como granos con precio a fijar superaron ampliamente el pasivo granario informado por la Concursada” (énfasis añadido).

Grafican lo expuesto con las tablas que siguen:

Deudas comerciales - Estados Contables Individuales de la Concursada		
KUSD	Según Rta. de circulares KUSD	
	Oct 17	Oct 18
Deudas comerciales - Según Estados contables Individuales		
Saldos Proveedores de materias primas	6.501,8	32.382,3
Según de circulares		
Respuestas Circular Proveedores de Materias primas	138.845,0	75.551,3



Y concluyen los auditores forenses:

“En la tabla y gráfico precedentes podemos observar que el pasivo de la Concursada aumenta considerablemente durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019, el cual se ve compuesto principalmente por la provisión por los contratos con precio a fijar – que asciende a USD 506,3 millones (un 89%), según nos informó la Concursada.

“Sin embargo, nada más con la información recibida de ocho de 20 proveedores seleccionados (nótese que el Concurso tiene más de 1.800 acreedores granarios) se observa con claridad que el pasivo expuesto en los cierres de octubre de 2017 y 2018 no estaría incluyendo la deuda por la compra-venta de granos con precio a fijar. En efecto, en octubre de 2017 en el rubro Proveedores de Materias Primas se expuso una deuda de USD 6,5 millones, mientras que los proveedores seleccionados manifiestan tener un saldo de granos pendientes de fijar precio por un valor de 138,8 millones a la misma fecha. En octubre de 2018 tenemos USD 32,4 millones versus USD 75.6 millones (énfasis y subrayado añadidos).

“Aun no tenemos certeza si esas deudas con los proveedores granarios fueron efectivamente registradas y, en todo caso, en qué rubros del balance eran incluidas. Lo que sí parece evidente, al menos con la información parcial recibida hasta el momento, es que no se encontraba expuesta en el Pasivo. Esto potencialmente podría tener un impacto en los ratios que se utilizaban para evaluar la salud financiera de la Concursada. Nuevamente enfatizamos la importancia de que la Concursada nos ayude a interpretar estas cifras de manera acabada (énfasis y subrayado añadidos).

Es de tal **claridad, contundencia y gravedad** lo que exponen los auditores forenses (aun cuando se trate de conclusiones provisionales), que resulta verdaderamente increíble que la Sindicatura no haya formulado ninguna referencia sobre el punto.

En cambio, afirma la Sindicatura que *“No obstante nuestra opinión sobre la aptitud e idoneidad de las registraciones contables, nuestra tarea inquisitiva nos permitió detectar una omisión, que señalamos en nuestro primer Informe mensual, relativa a la abstención de exponer o decir sobre la existencia de “marcas” registradas a nombre de la concursada que constituyen un activo intangible no expuesto en los estados contables, ni mencionado en documentos relacionados – notas, memorias, cartas de gerencia, informes de auditoría, informes de la veeduría y del Comité de Control, entre otros – y que a nuestro juicio deben ser considerados como tal”.*

Sin duda es correcto que si existe una omisión en el rubro “Marcas” la Sindicatura lo ponga de relieve; por supuesto que no hay nada objetable en eso.

Pero el dato es al mismo tiempo revelador de que el Informe General se limitó a un análisis muy superficial y parcial:

esa marca registrada no incluida en los balances constituye una minucia insignificante frente a la realidad (respaldada en constancias de la causa) de que Vicentin ha adulterado sus cuentas de inventarios y deudas comerciales para exhibir desde hace años una solvencia financiera que no tenía, y de ese modo obtener financiamiento que no habría obtenido de haber expuesto su realidad económico - financiera con sinceridad .

No aborda la Sindicatura en su Informe, de manera tangencial siquiera, la noción del “**pasivo fuera de balance**”, en la que sí ahondan los auditores para dejar de manifiesto una realidad a todas luces inquietante.

Este es el punto en donde la Sindicatura debió indagar cuando asegura en varias de sus conclusiones sobre las causas de la cesación de pagos las dificultades de Vicentin para mantener sus fuentes de financiamiento y el peso de las financiaciones sobre los resultados operativos.

Con toda seguridad, de haberlo hecho, y solicitado a Vicentin -como lo hicieron los auditores forenses- la información sensible para indagar en la veracidad de las registraciones contables en materia de cuentas de inventarios y deudas comerciales, no habría encontrado la cooperación que manifiesta tuvo la deudora al proveerle siempre el acceso a la información solicitada.

En este sentido, nos resulta de singular importante destacar un elemento central sobre esa cuestión de las dificultades de Vicentin en materia de financiamiento.

Los pasivos comerciales de Vicentin al 31-10-2018 y 2019 totalizaban Ar\$ 5.046.263.289 y Ar\$ 38.241.400.126, respectivamente, en tanto que los pasivos financieros totalizaban Ar\$ 55.688.013.144 y Ar\$ 66.521.122.302, respectivamente.

Al 31/10/2018 los pasivos financieros eran 11.04 veces superiores a los pasivos comerciales. Mientras que al 31/10/2019 los pasivos financieros eran solo 1.74 veces más que los comerciales.

Ello significa que por cada Ar\$ 1 (un peso) de financiamiento comercial al 31-10-2018, existían Ar\$ 11,04 (once pesos con cuatro centavos) de financiamiento bancario; y por cada Ar\$ 1 (un peso) de financiamiento comercial al 31-10-2019, existían Ar\$ 1,74 (un peso con setenta y cuatro centavos) de financiamiento bancario.

Sin embargo, el aumento relativo que experimentaron los pasivos comerciales no se explica por una sustitución de fuentes de financiamiento, por la simple razón de que los pasivos financieros aumentaron de un ejercicio al otro en un 20%.

Si no hubo sustitución de pasivos, entonces caben dos situaciones posibles: los pasivos comerciales aumentaron de manera brutal de un ejercicio al otro en un 658% (con contrapartida en inventarios), o en realidad los EECC cerrados al 31-10-2019 finalmente reflejaron pasivos que no se encontraban registrados en la contabilidad de la concursada, sincerando una situación que era ya inocultable a la luz del proceso de verificación propio del proceso concursal.

Esto último es lo que dejan en claro los auditores forenses en su Tercer Informe de Avance.

La contabilidad de Vicentin no refleja que el aumento de los pasivos comerciales tenga como contrapartida el aumento en inventarios. No se explica entonces cómo puede la Sindicatura realizar su tarea sobre la base de pasivos al 31-10-2018 que los acreedores de la concursada desconocemos. Ni por qué omitió la Sindicatura toda referencia a estos pasivos “fuera del balance”.

8. Desde otra perspectiva, corresponde también señalar enfáticamente que mal puede predicarse como un hecho demostrativo de la regularidad en las registraciones contable de Vicentin, la coincidencia entre el pasivo denunciado al inicio y los créditos verificados.

Sobre este punto, dice la Sindicatura: *“Hemos destacado en otros pasajes de este abordaje que hacemos, que la totalidad de los capitales denunciados como como deudas financieras con entidades nacionales y extranjeras coincidieron con las pretensiones insinuadas, y en el resto de los acreedores denunciados la mayoría de sus pretensiones también fueron coincidentes con la denuncia al momento de la solicitud de apertura del proceso concursal, en forma coincidente con las registraciones contables de la concursada y su documentación de respaldo”*.

Sin embargo, eso a lo sumo demuestra que la concursada brindó información precisa sobre quiénes eran sus acreedores, y por qué monto, al 10 de febrero de 2020 cuando formuló su presentación en concurso. Pero nada más.

Es obvio destacar que constituye, de nuevo, un abordaje que asombra por lo superficial y simplista postular como un dato que refrenda la regularidad en la registración contable el hecho de que la concursada no hubiera ocultado pasivos en su presentación en concurso.

El *quid* del asunto no es ese: sino indagar, como debió hacerlo y no lo hizo la Sindicatura, más profundo, mucho más profundo en la contabilidad de Vicentin para poder concluir efectivamente si sus EE.CC. correspondientes a los últimos tres ejercicios (aquellos que

por ley está obligado el deudor a presentar como requisito de inicio) exhiben una situación financiera real o si, por el contrario -como todo lo indica a esta altura en el caso- son nada más que una ficción amañada con el propósito de exhibir una solvencia financiera que no es tal.

Este trabajo brilla por su ausencia.

En este caso, a la evidente parcialidad se le agrega una componente de enorme ingenuidad.

El proceso de verificación permite un control por oposición, lo cual en principio desalienta cualquier conducta indebida.

Las imputaciones penales incluso a la concursada no se refieren al stock de pasivos a la fecha de presentación en concurso, sino a la brusca (e inexplicada) evolución de ese rubro, pasando de sumas muy pequeñas -tal como lo reflejan los EECC- a montos cuya magnitud determinó un estado de insolvencia por sumas mayúsculas cercanas a los USD 1.500 millones. Entendemos que el sinceramiento de los pasivos fue la consecuencia natural de la presentación en concurso preventivo. El proceso de verificación de créditos produjo el colapso de la arquitectura contable diseñada por la Compañía para el ocultamiento del pasivo. De ninguna manera encontramos en dicho sinceramiento un elemento que sea digno de ser destacado por parte de la Sindicatura. Por el contrario, las trabas que actualmente enfrenta la auditoría forense para dilucidar la evolución de los pasivos, entre otras cosas, nos sugiere una suerte de continuidad en la estrategia de la concursada de ocultar el nivel histórico de sus pasivos.

Una pregunta que cabría hacerse llegado este punto es si la Sindicatura coincide o no con las conclusiones expuestas por los auditores forenses en su Tercer Informe de Avance.

Más concretamente aún:

¿Es relevante para la Sindicatura, a la hora de analizar las causas del desequilibrio económico, que Vicentin, en su informe trimestral de julio de 2019, haya informado inventarios propios por USD 714 millones, y que, al momento de concursarse, a los muy pocos meses, ese mismo rubro haya bajado a nada más que USD 10 millones?

¿Es relevante para la Sindicatura, a la hora de analizar las causas del desequilibrio económico, que Vicentin, en su informe trimestral de julio de 2019, haya informado deudas comerciales con proveedores de granos por solo USD 10 millones, y que, al momento de concursarse, a los muy pocos meses, ese mismo rubro haya ascendido a USD 417 millones?

El Informe General no ensaya ninguna explicación científica, objetiva y fundada, se limita nada más que invocar causales genéricas (sequía, la incertidumbre de las elecciones primarias de agosto de 2019 -PASO-, las condiciones del mercado internacional) sin realizar esfuerzo alguno siquiera por demostrar sus efectos concretos en el caso particular, ni -mucho menos todavía- adentrarse en indagar o prospectar la incidencia de “causas endógenas”, propias del (des) manejo empresario, como fuente primera y determinante del desquicio organizacional y financiero resultante, que determinaron la presentación y formación de este exorbitante proceso concursal.

Se adentra incluso en explicaciones geopolíticas sobre la incidencia en el precio de los *commodities* ante un potencial enfrentamiento entre el Secretario General del partido gobernante de China y el presidente de los Estados Unidos.

Eso no hace ningún sentido para este caso; lo mismo que difícilmente pueda explicarse la debacle financiera de Vicentin

a partir de factores tan etéreos, abstractos e inexplicados como *“las crisis migratorias”*.

Pero por muy sofisticadas que pretendan ser sus consideraciones, los verdaderos **“agujeros negros”** contables en las registraciones de Vicentín (pasivos fuera de balance) continúan sin encontrar respuesta y ni un intento de explicación plausible siquiera.

Ese es el tipo de preguntas que corresponde hacerse.

Y todavía más:

¿Es importante para la Sindicatura -o le parece un dato menor- la asertiva conclusión de los auditores forenses en cuanto a que, comparando el ejercicio cerrado al 31/10/2019 con los períodos anteriores de 2017 y 2018, se advierte un incremento nada menos que del 1.664 % en el rubro “proveedores de materias primas”?

¿No tiene especial interés para la Sindicatura, a la hora de ponderar cuáles fueron las causas del desequilibrio económico de Vicentín, profundizar en el dato de que contratos bajo la modalidad “precio a fijar” por un importe de USD 636 millones a julio de 2019 “no se encontrarían registrados como pasivos comerciales al cierre del trimestral bajo IFRS, presentado en esa fecha”?

¿O que los pasivos comerciales de Vicentín pasaron de USD 106,6 millones en julio de 2019 a USD 696,8 millones en solo tres meses, derivándose de allí que “Semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compra-venta de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el Pasivo de los años anteriores”?

Por descontado que la Sindicatura puede disentir con el análisis de los auditores forenses, pero en ese caso debió, al menos, explicar por qué, y explayarse en los fundamentos científicos de su posición diversa. Tampoco hizo esto.

Esta es la retroalimentación que debía existir según las resoluciones del Tribunal.

Sorprenden las enormes diferencias de percepción que cada órgano manifiesta respecto de la oportunidad de la información, y de la calidad y precisión de las registraciones contables.

En relación con la oportunidad de la información es de recordar que los EE.CC. correspondientes al ejercicio finalizado el 31-10-2019 fueron presentados ante el tribunal luego de transcurridos más de 7 meses de iniciado el proceso concursal (ya veremos en seguida la increíble postura que adopta la Sindicatura en relación con esta demora en la emisión de los EE.CC. del ejercicio 2019, restando toda relevancia a los intentos de la concursada por obstruir hasta donde pudo la puesta a disposición de esa imprescindible pieza contable).

Nos supone entonces a los acreedores un enorme desafío y esfuerzo (vano, desde ya) armonizar semejante demora con la noción de *“información disponible de manera oportuna”* a la que alude la Sindicatura.

Con relación a las capacidades tecnológicas, simplemente basta una lectura rápida de los informes de avance elaborados por la auditoría forense para tomar dimensión de las dificultades que enfrenta para reconstruir la información histórica.

Nuevamente nos encontramos con adjetivaciones que, a nuestro juicio, son incompatibles con el rol del Síndico (*“... debemos informar, con contundencia ...”*). En esta última

línea, nos preguntamos acerca de las razones por las cuales la Sindicatura estima que KPMG decidió rescindir el vínculo que lo unía con la Compañía en condición de auditor externo.

Viene al caso recordar que KPMG, en su presentación formulada en el expediente en fecha 31 de agosto de 2020, informó sobre la suspensión de sus servicios de auditores a los EE.CC. de Vicentin en virtud de los “*riesgos de asociación*” con la concursada, siendo que “...*el nombre de KPMG queda asociado al del ente al cual el informe estará dirigido y existirán usuarios del informe de KPMG que son terceros distintos del cliente*”; además de no poder Vicentin “...*suministrarnos la información que requeriríamos para poder continuar con el servicio*”.

Habría sido de mayúsculo interés para esclarecer muchas cuestiones vinculadas con la muy dudosa registración contable de la concursada que la Sindicatura, en su Informe General, y previa indagación sobre el punto, explicara a los acreedores y al Tribunal cuáles fueron las razones concretas, más allá de las genéricas explicitadas por KPMG en su nota referida, por las que dicha firma no continuó en su rol de auditora de cara a los EE.CC. a emitirse por el ejercicio cerrado el 31/10/2019.

Porque KPMG considerara que la realidad económica y financiera expuesta por Vicentin en su escrito inicial (forzada por el sinceramiento que supone presentarse en concurso) se compadecía con los EE.CC. de los ejercicios anteriores, seguro que no.

La Sindicatura escogió la opción más simple: hacer como si esos datos no existieran. Quizás en esta actitud esté el origen de la postura de total desdén que la Sindicatura expone en relación con lo ocurrido dentro del trámite del concurso sobre la emisión de los EE.CC.

de Vicentin al 31/10/2019.

9. Desde otra óptica, pero siempre en relación con los tardíos EE.CC. que presentó la concursada relativos al ejercicio cerrado el 31/10/2019, debe señalarse que la Sindicatura en su Informe General señaló lo siguiente en relación con las causas del desequilibrio económico:

“Finalmente, en la Memoria del Directorio, adjunta a los estados contables al 31-10/2019, se mencionan la mayoría de los aspectos que hemos desarrollado como causas invocadas, entre los que destacamos: “II Contexto Macroeconómico Nacional. Efecto en los Resultados: 2.1. El marco de desenvolvimiento nacional durante el año 2019; 2.2. Efecto Sequía 2018; 2.3. Pérdida del Diferencial Arancelario; III. Situación Económica Financiera: 3.1. Situación Económica; 3.2. Situación Financiera y su Efecto en los Resultados del Ejercicio; 3.2.1. Línea del Banco de la Nación Argentina. Situación planteada por sucesivas devaluaciones; 3.2.2. Evolución Líneas de Crédito; 3.2.2.1 Internacionales: 3.2.2.2. Nacionales; 3.23. Aceleración de Fijaciones; 3.2.4. Resultados Financieros; 3.2.5. Intentos de evitar una crisis financiera ...”.

Nuevamente, la Sindicatura no hace aquí tampoco ningún esfuerzo por indagar en la realidad de las causas, sino que se limita a dar por corroborada su postura confrontándola nada menos que con la Memoria de los EE.CC. emitidos por el deudor, los cuales, como se dijo, se encuentran además severamente impugnados.

Y no toma en cuenta que esos EE.CC. fueron emitidos más de siete meses después de presentado el concurso preventivo, y que, como lo dijo la propia Vicentin de manera expresa,

clara e inequívoca, el prolongado diferimiento en su emisión (que sin duda continuaría hasta el día de hoy a no ser por la proactividad del Comité de Control y el Tribunal al establecer un plazo perentorio) tuvo un propósito deliberado: que los números *“se compadezcan adecuadamente con las actuaciones que se cumplirán en el trámite concursal”*.

En tales condiciones, resulta sorprendente que la Sindicatura legitime su análisis a partir de las manifestaciones de una Memoria emitida en esos términos, más de siete meses después de presentado el concurso preventivo y cuando Vicentin ya de antemano había preanunciado (como se verá luego), frente a un requerimiento de la propia Sindicatura, cuál era su particular metodología para seguir en la confección de esos EE.CC. precedidos de la *Memoria* en cuestión.

10. La devaluación de la moneda local es otra causal de la que echan mano Vicentin y la Sindicatura para explicar la cesación de pagos.

También en este capítulo surgen muchas observaciones e interrogantes.

Por de pronto, no podemos desconocer que, desde un punto de vista estrictamente cambiario, Vicentin es una de las compañías en la Argentina con mayor protección natural frente a los vaivenes del tipo de cambio, debido a que su actividad se centra fundamentalmente en la exportación.

La propia Sindicatura así lo explica al afirmar que Vicentin *“... se posiciona dentro de las diez exportadoras más grandes del país (en efecto, más del 90 % de sus ventas tiene como destino final el mercado internacional, dado que Argentina tiene un mercado interno muy pequeño para el volumen producido”*.

Vicentin es pues una empresa “privilegiada” desde el punto de vista netamente cambiario. Las compras y ventas, más allá de alguna componente temporal, están nominadas en la misma moneda, dicho de otra manera, están calzadas. A diferencia de muchas otras industrias, el riesgo devaluatorio en Vicentin se encuentra fuertemente mitigado por la propia naturaleza de la actividad que desarrolla.

Respecto de la deuda denominada en dólares, en el caso de Vicentin la diferencia de cambio no es generadora de déficit financiero, debido a que los vencimientos en dólares se afrontan con generación en moneda dura.

En todo caso, las dificultades para afrontar los compromisos es consecuencia de márgenes operativos exigüos o negativos. Distinta es la situación de una compañía endeudada en dólares con márgenes que se fijan en pesos. La diferencia de cambio contenida en los EECC de Vicentin al 31-10-2019 (la cual no podemos segregar debido a la política contable adoptada por la Compañía, y que la Sindicatura tampoco se encargó de investigar) en gran medida se explica por el mecanismo contable de ajuste de los pasivos en dólares vs. un mecanismo distinto de ajuste aplicable a los bienes de uso, cuya diferencia genera un fuerte impacto económico en el patrimonio neto.

Habiendo dicho eso, es bien sabido que la liquidez / capacidad de pago de una compañía no se mide conforme la simetría entre activos y pasivos, sino en función de la capacidad de generación de fondos.

Por lo anterior reafirmamos que las causas de la insolvencia de Vicentin deben ser localizadas en la evolución de los inventarios, cuentas por pagar comerciales, operaciones de crédito

***intercompany* y capacidad de generación de fondos, y no en un resultado meramente contable, que la concursada se encargó bien de ocultar –con la complicidad de las normas contables aplicables- bajo el rubro ómnibus denominado “Resultados Financieros y por Tenencia”.**

Si como declama la Sindicatura se propuso identificar si las causas de la cesación de pagos o desequilibrio económico que condujo a ella son atribuibles o no al deudor, debió ir mucho más profundo en este ítem de la devaluación, y no limitarse -como de hecho lo hizo- a señalar como causa *“La devaluación de la moneda argentina que impactó sobre las relaciones financieras preexistentes”*.

11. En vista de lo que se viene exponiendo tocante al ocultamiento de sus pasivos por parte de Vicentín (ver en especial lo desarrollado, con base en la auditoría forense, sobre los inventarios y deudas comerciales), es que no se comprende qué se propone la Sindicatura al afirmar que durante el 2019 *“la concursada continuó recibiendo créditos de diversas entidades”*.

No debería sorprender que una compañía que hasta ese momento no había exteriorizado ningún tipo de dificultad financiera, con EE.CC. que reflejaban una salud financiera que a la postre no fue tal, recibiera financiamiento de terceros.

Lo que sí debería sorprender –no obstante que la Sindicatura ignora el punto- es que en un período tan corto de tiempo Vicentín haya pasado de un estado de prosperidad a un estado de cesación de pagos tan estrepitoso (se insiste: uno de los más escandalosos que registre la historia concursal argentina).

En esta misma línea, no entendemos cuál es el

objetivo que persigue la Sindicatura cuando, refiriéndose a los requerimientos informativos cursados a las entidades financieras, afirma que *“A nuestro juicio resulta útil destacar algunas de las manifestaciones concretadas porque permiten entrever comportamientos y cumplimientos por parte de la deudora a lo largo de la relación comercial-financiera que los liga”*.

Era obvio que las respuestas por parte de las entidades financieras iban a ser las que, de hecho, todas ellas exteriorizaron.

Por la sencilla razón de que hasta muy poco tiempo antes de la cesación de pagos (semanas) Vicentin se las ingenió para exhibir a sus acreedores, con base en documentación con fuertes indicios de falsedad (indicios precisos, plurales, graves y concordantes) una solvencia que era ya inexistente desde hacía muchísimo tiempo.

De nuevo: basta repasar los datos sobre inventarios y deudas comerciales expuestos por los auditores forenses y contrastar los propios números de la Compañía expuestos en sus estados financieros trimestrales con la realidad que expuso al presentarse en concurso preventivo y en sus demorados EE.CC. del ejercicio cerrado el 31/10/2019.

Esos requerimientos, y la forma en que la Sindicatura los expone en su informe, se muestran claramente orientados a instalar una suerte de estándar ético de cumplimiento por parte del deudor, que pierde toda verosimilitud no bien se repara en las conclusiones de los auditores forenses y demás informes presentados en autos por los veedores e interventores designados por el Tribunal.

Es decir que, a nuestro juicio, hubiera sido

mucho más importante desde la perspectiva de los usuarios del Informe, el análisis y transcripción de muchos de los párrafos redactados por los auditores forenses resaltando las enormes dificultades que enfrentaron para reconstruir y comprender las registraciones contables de la Compañía en su libro diario.

En general la Sindicatura optó por tomar párrafos redactados por la concursada, pero no así aquellos redactados por otros colaboradores designados por el juez (i.e.: veedores, auditores forenses, etc.). Considerando el rol que la ley le asigna a la Sindicatura, la lógica concursal hubiera aconsejado más bien lo contrario.

Desde luego, tampoco puede coincidirse con la aseveración de la Sindicatura en el sentido de que la Compañía procuró una salida ordenada, y la preservación del patrimonio social.

Por “*salida ordenada*” entendemos una propuesta que alcance a las distintas categorías de acreedores, atendiendo a sus diferentes necesidades, y dando respuestas a las consultas formuladas por acreedores que no podían salir de su asombro tras la noticia de un default intempestivo de más de USD 1.500 millones.

Los acreedores financieros, por lo pronto, fueron completamente ignorados en la negociación, lo cual nos resulta al menos curioso, habida cuenta que las mayorías que exige ley para la homologación de un APE requerían obligadamente su acompañamiento de los acreedores financieros.

Por otro lado, la venta del 16.67% del capital social de Renova entre gallos y medianoche, a espaldas de los acreedores, a sabiendas de que el producido de dicha venta sería insuficiente para atender los reclamos de los productores, beneficiando a su socio Glencore como uno de los principales destinatarios de la cancelación de sus

acreencias comerciales, pone en evidencia cuanto menos una actitud negligente e impericia notable por parte de la Compañía y exterioriza la total indiferencia de Vicentin en cuanto a la preservación del patrimonio social.

Resulta sorprendente asimismo que la Sindicatura se aventure a afirmar que en ausencia de “circunstancias procesales” la Compañía hubiera obtenido la aprobación por parte de sus acreedores en el marco de un APE. De hecho, refiere de manera contundente que “el procedimiento fracasó por esas acciones”, pero no señala de qué manera los consentimientos hubieran pasado de un 35% al 66,66% que requiere la ley.

A esta altura de los acontecimientos este tipo de observaciones pueden lucir anecdóticas, no obstante lo cual es importante ponerlas de relieve para evitar que con base en puras conjeturas – infundadas- se acomoden hechos del pasado dando lugar a un relato que se aviene a las necesidades de la concursada.

12. Hemos hecho mucho hincapié a lo largo de los puntos precedentes a la sorpresa que nos causa la afirmación de la Sindicatura en cuanto a que pudo siempre acceder a la totalidad de la documentación y registros contables de la concursada.

A la vista de todo cuanto ya se expuso, es por demás evidente que eso solo puede deberse a que la Sindicatura no pesquisó sobre ningún aspecto sensible, lo cual se evidencia en la superficialidad de sus conclusiones y en las severas omisiones sobre aspectos muy sensibles que el Informe General no roza ni siquiera de lejos.

Quienes intentaron y aún intentan obtener información sensible, por el contrario, sufren ingentes dificultades a la

hora de obtener información.

Ya referimos el caso de los auditores forenses.

No queremos cerrar este capítulo sobre observaciones a las causas del desequilibrio económico sin recordar lo expuesto por el Tribunal en su resolución de agravamiento de la intervención, datada el 3 de diciembre de 2020, y que hace directamente al punto.

Se dijo allí:

“La principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado.

Cabe destacar aquí que, el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal (Art. 17 LCQ).

Valgan como ejemplos de tales conductas, cotejables en las constancias de autos, los siguientes:

a) Las inconsistencias demostradas en orden a la presentación del balance del ejercicio 2018-2019, lo que motivó una intimación judicial y emplazamiento a los Sres. Directores en tal sentido. Previo a ello se habían formalizado en este expediente los siguientes requerimientos:

1) Al momento de la presentación en concurso, pedido de presentación de la memoria y balance 2019 (cuerpo 3 - fs. 412-417);

2) Al disponer la apertura del concurso,

oportunidad en la cual se enfatizó que ello debía cumplimentarse razonablemente mediante la actuación de la sindicatura (cuerpo 9, fs. 1611-1621);

3) Luego del 1º informe de evolución de la Sindicatura (cuerpo 16, fs. 3123, providencia de fecha 8/7/2020);

4) Al formular un requerimiento complementario a la Sindicatura, se incorporaron varios puntos sobre los papeles de trabajo de la auditoría externa, el balance del 2019 y el posible plan de negocios de la empresa, como así también las medidas de conservación de sus activos (cuerpo 19, fs. 3659 y stes. resolución del 15/7/2020);

5) Al requerir que se confeccione el balance y la memoria, emplazando formalmente a la sociedad concursada para su presentación ante sus propios accionistas y obviamente en este expediente (cuerpo 19, fs. 3703, providencia del 23/7/2020);

Dicha conducta se da de bruces con la esperable por parte de quien debe colaborar abiertamente con el tribunal y órganos del concurso en orden a tales requerimientos razonables, de cara a sus acreedores.

b) El actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31-10-2020 (hace ya más de 2 meses atrás) y la correspondiente memoria, como así también la elaboración de un plan de negocios que haya sido diseñado y expuesto a los acreedores o al tribunal. Consiguientemente con ello, la convocatoria a una Asamblea para su tratamiento.

c) La falta de respuestas frente a los requerimientos del tribunal con relación a las anteriores auditorías

externas llevadas adelante por KPMG.

d) El ocultamiento de las razones que motivaron la ruptura contractual con KPMG: Recordemos que aquellos interrogantes fueron develados recién a partir de una búsqueda de respuestas, encarada de oficio por este Juzgado. En dicho contexto, explicitando la existencia de un “riesgo de asociación”⁶, aquella empresa de auditoría externa manifestó que había sido desvinculada por los directivos de la sociedad concursada antes de concluir sus tareas de auditoría correspondientes al ejercicio económico 2018-2019.

Luego, ante el pedido de este Juzgado de los papeles de trabajo correspondientes a las tareas que habían desarrollado al respecto, sometió su efectiva entrega a una previa autorización de su cliente, o sea VICENTIN.

Frente a ello, los directivos de la empresa, nuevamente guardaron silencio sin permitir el acceso a dicha información (vide. Cuerpo 23, fs. 4410, cargo 4872, pedido de la Sindicatura a KPMG; Escrito de la sindicatura informando que no puede acceder a los datos, cuerpo 24, cargo 5212 del 18-8-2020; Hasta llegar finalmente al cuerpo 25, fs. 4841, cargo 5757 del 1-9-2020, en el cual KPMG explica la situación sin que exista, finalmente, el mentado acceso a la información pretendida).

Recordemos aquí que, el concursado tiene el deber de colaboración agravado a los fines permitir que, tanto el tribunal como los acreedores y demás órganos y funcionarios del proceso, puedan tener acceso directo e irrestricto a la información relevante, a los fines de brindar seguridad jurídica y garantizar el pleno conocimiento del estado del activo y pasivo, la proyección estimativa de sus negocios y el curso de

acción de la empresa.

Sobre esta confianza se edifica todo posible acuerdo entre los protagonistas del conflicto y de ello depende, en gran medida, su solución o resolución, tanto dentro de este expediente como en la realidad de los hechos.

Por lo tanto, conforme a los acontecimientos procesales relevantes, tanto en este principal proceso concursal como en el incidente de intervención sustanciado a instancia de la IG PJ de Santa Fe, se ha llegado a la convicción que se debe incrementar el grado de intervención dispuesto en la Resolución N° 295 (Tomo 46, Folio 360), de fecha 7/8/2020, conforme se explicitará seguidamente...”.

Como se advierte, entonces, la Sindicatura ha sido el único sujeto procesal con quien Vicentin se ha mostrado cooperativo; al propio Tribunal, a los auditores forenses y demás auxiliares les ha resultado y les sigue resultando sumamente dificultoso - siempre- hacerse de la información necesaria para la realización de sus tareas.

Este dato (además de encontrarse debidamente documentado, como surge de la reseña en la resolución transcrita), es coincidente con el hecho de que, entre todos los sujetos procesales mencionados, solamente la Sindicatura no ha exhibido interés alguno por adentrarse en aspectos o cuestiones respecto de las cuales Vicentin pretende sustraerse a cualquier tipo de control.

El Informe General que aquí se contesta es una confirmación contundente e irrefutable de esa realidad.

III - SOBRE LA EXPRESIÓN DE LA ÉPOCA EN QUE SE PRODUJO LA CESACIÓN DE PAGOS:

En este punto la Sindicatura llega a la conclusión de que *“... en virtud de todo lo descripto en el inciso 1 de este informe general, con más las consideraciones vertidas precedentemente en este punto, esta sindicatura entiende que la época de cesación de pagos debe fijarse – en virtud de todo lo analizado previamente - en la primera quincena del mes de diciembre del año 2019, avalada por los hechos y circunstancias que la ley ordena describir”*.

Fuera de citas doctrinarias, la transcripta es la única consideración de mérito que efectúa la Sindicatura a los efectos de concluir que la cesación de pagos ocurrió en el mes de diciembre de 2019.

El inc. 6° del art. 39 L.C.Q. exige de la Sindicatura no solo la *“Expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos”*, sino que también añade: *“precisando hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen”*.

Esto último -la precisión de los hechos y circunstancias en que se funda el dictamen- no aparece cumplido.

El Anexo I del Capítulo 6 al que remite *“particularmente”* la Sindicatura no es más que un listado en el que se indica, según parece, la quincena en la que se habrían concretado los incumplimientos de Vicentin con los distintos acreedores verificados.

Dicho ello, la hipótesis de la Sindicatura solo puede sostenerse si, como efectivamente lo hace la Sindicatura en su Informe General, la indagación sobre las *causas del desequilibrio económico* se limita a ratificar desde un abordaje por completo dogmático las causas invocadas por la concursada al inicio, prescindiendo de

cualquier otro elemento de los muchos y contundentes que se encuentran ya agregados al expediente.

No está de más reiterar la conclusión de los auditores forenses en su Tercer Informe de Avance con respecto al aumento exponencial de las deudas comerciales durante nada más que un trimestre de 2019 y que *“Semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compra-venta de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el Pasivo de los años anteriores”*.

Y al hilo de ello, preguntarse:

¿Desde cuándo venía Vicentín exhibiendo en sus balances y EE.CC realidades disociadas de su salud financiera real, mediante la exposición de inventarios y deudas comerciales que no reflejaban la veracidad de ninguna de ambas cuentas?

¿No tendría eso una incidencia directa en la época en que se produjo la cesación de pagos?

El hecho de que se trate de conclusiones provisionales -siendo que se encuentran pendientes las conclusiones definitivas de la auditoría forense- no autoriza a la Sindicatura a prescindir de los elementos que se encuentran ya incorporados en el expediente (menos aún cuando considerarlas era una instrucción concreta, clara e inequívoca emanada de la orden del Tribunal datada el 21 de agosto de 2020).

Dado que las causas del desequilibrio económico y la época en que se produjo la cesación de pagos son conceptos estrechamente vinculados -en un punto inescindibles- era de esperar en el abordaje de este capítulo el mismo tratamiento sesgado y superficial que la Sindicatura dio al referido a las causas del desequilibrio económico.

Postular que Vicentin incurrió en cesación de pagos en la primera quincena de diciembre (dos meses antes de concursarse) es una hipótesis totalmente inverosímil a la luz de todo lo que se discute en torno de la veracidad de sus balances y registraciones contables.

Aspecto que la Sindicatura no pudo ni debió omitir al punto de no mencionar siquiera esas circunstancias.

Una cosa es el hecho que exterioriza la cesación de pagos (la intervención de caja, por ejemplo), y otra cosa muy distinta es la identificación del momento en que la empresa no estuvo ya en condiciones de afrontar por medios regulares sus obligaciones exigibles.

No hay duda de que la Sindicatura ha realizado un examen muy superficial de las causas que determinaron el estado de cesación de pagos de la concursada, por lo cual, entendemos, sus afirmaciones en cuanto a la fecha de inicio de dicha cesación de pagos deben analizarse bajo el prisma de una labor que carece de la rigurosidad científica que las circunstancias exigen.

El hecho de que estas acciones solo puedan concretizarse en una etapa eventual de liquidación no habilita de ningún modo a una labor superficial y carente de rigurosidad científica.

Las acciones de recomposición patrimonial que la ley prevé para los actos descriptos bajo los artículos 118 y 119 adquieren especial relevancia en un contexto en el que, de un día para el otro, los inventarios desaparecieron por completo, las acreencias comerciales se multiplicaron por cientos de millones, algunos acreedores tuvieron un tratamiento preferencial a la hora del cobro, y la tenencia accionaria en la compañía dueña de la planta de *crushing* más eficiente del mundo pasó de una situación de co-control a una posición minoritaria,

subestimando con total indiferencia por la defensa del patrimonio social, la pérdida de valor asociada a una transacción en la que se transfiere lo que comúnmente se conoce como el swing vote.

Por ello nos reservamos el derecho de cuestionar la citada determinación sobre la base de los resultados de la auditoría forense que aún no han sido presentados producto de las trabas permanentes que dicha auditoría ha enfrentado a lo largo del proceso, y que sin dudas se explican en la necesidad imperiosa de la concursada de bloquear o al menos demorar cualquier opinión profesional en disidencia con el contenido del presente Informe.

Existen, como ya se dijo reiteradas veces, indicios que nos inducen a pensar que los estados contables de la concursada por los períodos 2017, 2018 y 2019 no reflejan adecuadamente la situación económica, patrimonial y financiera de la concursada.

De hecho, las sumas millonarias de pasivos comerciales del tipo “fuera de balance” son la prueba cabal de que dichos estados contables no reflejaban la delicada realidad de la Compañía, e indujeron dolosamente a entidades financieras para que, sobre la base de dicha información, continuaron otorgando financiamiento.

Por otra parte, el presente Informe repite de manera sistemática que los niveles de endeudamiento de la concursada eran insostenibles, sugiriendo entre líneas una aparente co- responsabilidad entre prestamista y prestatario. En este punto, creemos relevante destacar que los financiamientos provistos estaban sometidos al cumplimiento de estrictas restricciones, muchas de las cuales fueron eludidas por aplicación de prácticas contables engañosas que desembocaron precisamente en niveles de endeudamiento totalmente fuera del control de los bancos

prestamistas.

La referencia hecha por la Sindicatura en repetidas oportunidades destacando que la concursada recibió sumas importantes de financiamiento durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019 no busca otro propósito más que el de instalar que la Compañía no se encontraba en cesación de pagos en esa época, en el entendimiento de que, si ese hubiera sido el caso, no habría recibido el financiamiento antes descripto.

Sin embargo, tal cosa no puede seriamente sostenerse si al mismo tiempo se ignoran por completo los fuertes cuestionamientos formulados por la auditoría forense en materia de políticas contables (aspecto que también se abordará en el Capítulo IV siguiente).

Por otro lado, es totalmente contradictorio -y revela hasta qué punto la Sindicatura efectuó aquí un análisis apresurado y superficial- que el Informe General considere como susceptible de revocación en los términos del art. 118 inc. 1º de la L.C.Q. un acto ejecutado el **14 de mayo de 2018** (cesión en comodato -gratuita- de un inmueble sito en la ciudad de Avellaneda en favor de Biogas Avellaneda S.A.), al mismo tiempo que postule la primera quincena de diciembre de 2019 como la época en que se produjo la cesación de pagos.

Por definición legal, el “período de sospecha” se inicia con la fecha de inicio de la cesación de pagos (art. 115 L.C.O.); de donde se sigue una incongruencia notoria y sustancial por parte de la Sindicatura en postular la primera quincena de diciembre de 2019 como la época en que se produjo la cesación de pagos, pero al mismo tiempo considerar susceptible de revocación un acto -que por definición debió ocurrir dentro del período de sospecha, que principia

en la fecha de cesación de pagos- celebrado el 14 de mayo de 2018.

No es admisible que en un concurso de esta importancia y de esta magnitud el Informe General aborde un punto tan esencial con semejante nivel de incongruencia, que no hace otra cosa que poner en evidencia, una vez más, la superficialidad en el abordaje por parte de la Sindicatura de los puntos más cruciales del Informe General.

Es claro también que la concursada debió haber informado a la Sindicatura (o la Sindicatura identificarlo de sus compulsas) acerca del juicio ejecutivo caratulado *"HIG TOF B.V. C/ALGODONERA AVELLANEDA SA Y OTROS S/EJECUTIVO"* (Expte. 13895/2017), de trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 31, Secretaría N° 62, en el cual, con fecha 4 de julio de 2017, se embargaron las cuentas bancarias de Vicentin por la suma de USD 22.436.418,77; mientras que en fecha 12 de marzo de 2018, se dictó contra Vicentin sentencia condenándola al pago de ese importe, con más los intereses y las costas del juicio.

Luego las partes arribaron a un acuerdo transaccional en el marco de un proceso arbitral seguido según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), respecto de cuyos términos hubiera sido deseable la Sindicatura brindara algún tipo de información.

Máxime teniendo en cuenta que el embargo de cuentas y la sentencia condenatoria contra Vicentin se dan en una fecha muy cercana a uno de los actos informados por la Sindicatura como susceptibles de revocación; y bajo uno de los ejercicios contables en relación con los cuales existen sobrados elementos de juicio ya incorporados al proceso (omitidos todos en su consideración por la Sindicatura), que dan acabada cuenta sobre la existencia de **"deudas fuera**

de balance", como fue ya explicado en detalle al tratar las causas del desequilibrio económico.

Tanto más no pudo obviarse la circunstancia de este juicio ejecutivo que afectó de modo directo a Vicentin cuanto que el embargo de cuentas bancarias y la sentencia condenatoria (aun cuando quedó en suspenso) son hechos reveladores claros de un estado de cesación de pagos.

No es cuestión de reiterar aquí todo lo ya expuesto en materia de **inventarios, deudas por cobrar, "deudas fuera de balance"**; simplemente destacar que también en este capítulo del Informe General, que es de importancia capital, la Sindicatura incurrió en los mismos vicios de superficialidad y un abordaje sesgado de la realidad, en un todo de acuerdo con la postura de Vicentin.

IV - SOBRE LA CONTABILIDAD DE LA CONCURSADA:

Ya se han efectuado en el Capítulo II consideraciones sustanciales sobre las registraciones contable de la concursada y lo inaudito que resulta el abordaje de la Sindicatura en cuanto se limita a ensalzar la cooperación de la concursada en el proveimiento de la información -obviando por completo el contraste con la realidad de veedores, interventores y auditores forenses, según surge de sus respectivos informes-, sin decir nada sobre las contundentes conclusiones de los auditores forenses en cuanto al evidente ocultamiento de pasivos por parte de Vicentin y su inescrutable política de registración contable en materia de **inventarios y deudas comerciales**.

No es cuestión de ser reiterativos, pero deben formularse ciertas consideraciones en torno del alcance de lo expuesto por

la Sindicatura en el Capítulo IV de su Informe.

No se puede afirmar que la concursada lleva su contabilidad conforme a derecho, cuando al mismo tiempo presenta los EE.CC. correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior a su presentación en concurso recién siete meses después de la apertura del proceso concursal.

De hecho, para no repetir la misma experiencia, el Tribunal decidió designar a un veedor como co-auditor bajo el estricto mandato de elevar los EECC 2020 para su aprobación en término.

La Sindicatura quita toda relevancia a la presentación tardía de los EE.CC. del ejercicio 2019.

A este respecto, y a modo ilustrativo, cabe preguntarse:

¿La Sindicatura considera indiferente, desde el punto de vista de la recomposición de su capital de trabajo, que la Compañía presente sus EE.CC en término?

En más de una oportunidad la concursada reclamó un voto de confianza de sus proveedores.

¿La Sindicatura cree posible que dicha confianza se pudo haber restablecido con independencia de la presentación de sus EE.CC correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior a su presentación en concurso?

El punto guarda estrecha relación con lo que se ha expuesto sobre las severas deficiencias y sospechas en la registración contable de Vicentín.

Decimos “*estrecha relación*” con lo expuesto antes porque, como se vio del análisis formulado por los auditores forenses, muchas de las conclusiones a las que arriban toman como

referencia de medición el balance que, tarde y luego de numerosas intimaciones del Tribunal (algunas a instancias del Comité de Control y otras de oficio), la concursada se avino finalmente a considerar y aprobar recién el día 17 de septiembre de 2021 (más de siete meses después de su presentación en concurso).

Sobre este punto, conviene rememorar el siguiente episodio, que traemos a colación porque lo consideramos de importancia y vale la pena impedir que entre tanta información acumulada en el expediente pase al olvido como si no hubiera sucedido.

Se trata de la postura adoptada por Vicentin cuando se le requería insistentemente que presentara los EE.CC. pendientes, información indispensable y sensible para la tramitación de cualquier proceso concursal.

Frente a un requerimiento formulado en tal sentido en el marco del incidente de intervención conexo CUIJ 21-24928723-4 (según información acompañada por la Sindicatura en su escrito de fecha 3 de julio de 2020), respondió la concursada que: *“los EECC no fueron aún aprobados por el Directorio de la concursada, por lo que de suyo no han sido llevados a la Asamblea para su legal aprobación. El Directorio ha concluido que bajo las circunstancias en las que se encuentra la sociedad, tramitando su concurso preventivo y próximo a producirse los informes más relevantes del proceso, de verificación de créditos y el general, aparece de toda prudencia postergar la producción de esos documentos contables, para que se compadezcan adecuadamente con las actuaciones que se cumplirán en el trámite concursal y cuándo éstas hubieran agotado su Instancia. No es ocioso resaltar que se está hablando de un ejercicio inmediatamente precedente a la presentación concursal, por lo que los esfuerzos administrativos*

fueron obviamente dedicados a la preparación de la documentación que acompañara ese pedido de apertura del procedimiento”.

Este párrafo no deja de ser sorprendente, pese al tiempo transcurrido: la postura de Vicentin -explicitada sin disimulo- era entonces que los EE.CC. correspondientes al ejercicio cerrado al 31/10/2019 debían postergarse hasta tanto sucedieran los principales hitos del proceso concursal (como la verificación de créditos) para después acomodarlos a la realidad del concurso (“para que se compadezcan adecuadamente con las actuaciones que se cumplirán en el trámite concursal”, dice la concursada en un intento por explicar lo inexplicable con algún eufemismo menos chocante).

Ahora bien, ¿por qué para la Sindicatura el punto es irrelevante, según lo afirma en su Informe General?

Allí señala: “... volvemos a insistir sobre la controversia suscitada por la falta de presentación oportuna de los estados contables al cierre del ejercicio 2019, en el entendimiento que ese documento, desde el punto de vista del proceso concursal, no podía aportar elementos decisorios para la conformación del pasivo concursal en la medida que las pretensiones insinuadas, nuestra labor inquisitiva, las impugnaciones de los distintos acreedores y de la propia deudora cristalizaron el mismo. Nótese que a la fecha de elaboración del presente Informe General muy pocas verificaciones tardías se han concretado”.

Son varias las cosas para decir sobre dicha explicación:

- En primer lugar, y al revés de como parece entenderlo la Sindicatura, el Balance no es importante únicamente desde la perspectiva de la conformación del pasivo concursal. Su

importancia trasciende con mucho ese propósito, y los resultados del análisis de los auditores forenses una vez que lo tuvieron a disposición para analizar y entrecruzar sus datos son, sobre el particular, muy elocuentes.

- Tampoco la cristalización del pasivo a que refiere a partir de las insinuaciones y observaciones torna al Balance irrelevante “*desde el punto de vista del proceso concursal*”. En todo caso, la cristalización a los efectos del concurso se da con la resolución judicial del art. 36 L.C.Q. (no con las insinuaciones ni observaciones). Pero, además, y como se dijo, el Balance es una pieza, una radiografía de la empresa cuya utilidad, más aún en el marco de un proceso concursal, y más aún todavía en uno de esta complejidad y dimensión, no se agota en la conformación del pasivo.
- Ese abordaje tan limitado que da la Sindicatura a la cuestión del Balance 2019, reduciéndolo a una mera expresión del pasivo, solamente podría ser entendible (si acaso) en un escenario donde no hubiera planteada duda alguna acerca de la sinceridad de los EE.CC. anteriores de la empresa concursada. Lo cual no es, obvia y lamentablemente, el caso de Vicentin (y esto bien lo sabe la Sindicatura), desde que existen en trámite actuaciones penales cuya hipótesis de acusación es ni más ni menos que entidades prestamistas fueron engañadas por la concursada mediante la exhibición de una solvencia patrimonial que era, lisa y llanamente, inexistente (volveremos sobre el punto al tratar la cuestión del apalancamiento financiero). No hace falta ser un experto en

contabilidad para saber que los Balances que en cualquier empresa se suceden año tras año, ejercicio tras ejercicio, están ligados unos a otros de manera inescindible, de modo tal que, a los fines analíticos, no es posible comprender cabalmente uno sin partir de la realidad reflejada en el anterior.

- El hecho de que se hayan presentado hasta el momento pocas verificaciones tardías (más allá de que resta todavía casi un año de plazo para hacerlo) a lo sumo predica que la concursada brindó información precisa sobre quiénes eran sus acreedores, y por qué monto, al 10 de febrero de 2020 cuando formuló su presentación en concurso. Pero este no es el punto, como ya se señaló antes. No hubo, hasta donde se sabe, acusaciones acerca de que Vicentin hubiera omitido denunciar la existencia acreedores legítimos o la cuantía de sus acreencias. **Lo que hay, en cambio, y la Sindicatura está al tanto de eso, son severas acusaciones fundadas en indicios múltiples, precisos y concordantes sobre la veracidad de sus registraciones contables a partir de las cuales Vicentin colectó, tanto de entidades financieras públicas como privadas, nacionales e internacionales, cientos de millones de dólares, exhibiendo hasta muy poco tiempo antes de su presentación en concurso una solidez económica y financiera que se desmoronó por completo de la noche a la mañana en defraudación de miles de acreedores grandes, medianos y pequeños de la más diversa naturaleza (comerciales, granarios, financieros, fiscales; accionistas incluso).**

Cuesta entonces comprender la postura de la

Sindicatura cuando expresa semejante desconsideración por el último Balance.

Y si bien es cierto que quizás el Balance sobre el último ejercicio anterior al concurso *“no podía aportar elementos decisorios para la conformación del pasivo”*, es claro que sí podía arrojar mucha luz sobre otros aspectos tan importantes como la metodología de registración contable de los inventarios.

De hecho, según se vio, los auditores forenses pudieron a partir de los datos de ese Balance 2019 extraer conclusiones sumamente relevantes como que Vicentin, en ejercicios anteriores, no contabilizaba como pasivo los inventarios de granos entregados por sus proveedores.

Merece también señalarse que este abordaje tan limitado que hace la Sindicatura sobre el Balance 2019 -reduciendo su importancia nada más que al reflejo del pasivo concursal en términos de acreedores insinuados, y desdeñándolo en todo lo demás que pudiera aportar- es de una mayúscula inconsistencia con el entendimiento que ella misma asignó al Informe General cuando describió su importancia.

En este orden de ideas, véase que en la página 5 del Informe -en la sección introductoria de las causas del desequilibrio económico- la Sindicatura afirma que *“... a esta altura, es decir, cuando ya es inminente el comienzo del denominado período de exclusividad”*, el Informe General adquiere *“una trascendencia mayúscula, puesto que, precisamente, la adecuada ponderación de dichas causas y, particularmente, la de si en la aparición de ellas ha influido la conducta del deudor o no, será elemento de juicio básico -pero, por cierto, no excluyente de otros posibles- para que cada acreedor pueda definir si presta conformidad o no a la propuesta de acuerdo...”*.

A partir del Tercer Informe de Avance de los auditores forenses queda en evidencia cuán importante resultaba contar con los EE.CC. de la concursada al 31/10/2019 -nada menos que los inmediatamente anteriores a su solicitud de concurso preventivo-, si en verdad quería indagarse, como lo pregonó la Sindicatura, en el muy pertinente y sensible punto de si en las *causas del desequilibrio económico* ha incidido o no la conducta del deudor.

Queda así en evidencia que una cosa es lo que, desde la teoría, la Sindicatura postuló debía ser el Informe General cuando abordó al comienzo de su reporte las características que este escrito debía contener, en tanto *“pieza fundamental”* del concurso, *“la pieza más importante de todo el proceso”*, incluyendo la ponderación de las causas del desequilibrio económico, puntualmente sobre *“si en la aparición de ellas ha influido la conducta del deudor o no”*; y otra cosa, muy diferente, es asistir al abordaje y la impronta que, en la práctica, la Sindicatura dio al Informe General, **en el que evitó u omitió cualquier tipo de involucramiento en aspectos sensibles de la contabilidad del deudor que pudieran, precisamente, develar la responsabilidad de la propia Vicentin en su cesación de pagos.**

En esta grave y muy vistosa actitud de ceguera y complacencia se inscribe entonces la crítica sobre el tratamiento que la Sindicatura dio a la omisión por parte de Vicentin de emitir en tiempo y forma sus EE.CC. correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/10/2019.

El *“dictamen sobre la veracidad”* que exige el precepto supone una indagación por parte del Síndico de, cuanto menos, los siguientes tres principios exigibles a toda contabilidad: uniformidad,

veracidad y claridad¹.

“La veracidad o exactitud... hace a la realidad de las anotaciones efectuadas. Un balance en que se adulteran las partidas o los valores asignados a las mismas, es un balance falso. La exactitud hace a la concordancia de sus anotaciones con la de los asientos; toda omisión o alteración se aparta del principio de exactitud (...) Los modos de cometer faltas contra la veracidad pueden ser los siguientes: 1) declaraciones sustancialmente falsas; 2) valoraciones deliberadamente inexactas; 3) mezcla de diversas verdades con una falsedad en conjunto, y 4) mezcla de partidas verdaderas con otras confusas, parciales o conscientemente inexactas”².

Así, entonces, resulta evidente que la conclusión de que Vicentin llega su contabilidad en legal forma no pasa de un análisis meramente formal y carente de toda sustancia, **muy alejado una vez más de la exhaustividad de análisis que exigía el tratamiento del punto en virtud de las particularidades de este concurso preventivo.**

En efecto, una vez más -y contrariando la manda judicial del 21 de agosto de 2020- la Sindicatura prescinde de considerar siquiera las conclusiones vertidas por los auditores forenses en su Tercer Informe de Avance, ya largamente reseñadas, en materia de cuán inexplicables aparecen los rubros de **inventarios y deudas comerciales** del modo en que la concursada los expuso en sus últimos EE.CC. previos al concurso, en comparación con la realidad expuesta en su escrito inicial y en los tardíos EE.CC. correspondientes al ejercicio 2019.

Pero, además (y esto sí se apunta ahora por

¹ Cfr. Heredia, *Tratado Exegético de Derecho Concursal*, T. I, pág. 800/801.

² Ídem nota n° 9.

primera vez en este escrito), la Sindicatura concluye con total ligereza en la regularidad de la contabilidad llevada por Vicentin, y en la falta de cualquier tipo de observaciones para realizar, sin considerar el enorme desafío que está suponiendo para los auditores forenses explicarse la contabilidad de Vicentin.

El Tercer Informe de Avance de los forenses da clara cuenta de ello en la *“Descripción de la política de registración contable transmitida por la Compañía”*.

Por ejemplo, en el tópico crucial de los inventarios, los auditores señalan que *“a efectos de analizar los mencionados stocks, en primer lugar, nos dieron acceso al sistema ORACLE, de donde se obtienen los valores monetarios de los inventarios de cada cierre, pero no la información de detalle. La misma, según nos informaron, surgiría del sistema COBOL”*.

Se adentraron entonces los auditores en el mentado sistema COBOL. Lo explican del siguiente modo:

“Teniendo en cuenta esto, se pidió el acceso al sistema COBOL, ya que la Concursada, tal como se mencionó en el punto anterior, nos informó que con el acceso a dicho sistema contaríamos con toda la información necesaria para la validación de los stocks de bienes de cambio, tanto los movimientos de los depósitos (altas y bajas), detalles de contratos, y las cuentas corrientes de los proveedores de granos, con los saldos de los stocks por proveedor. Sin embargo, cuando finalmente tuvimos acceso a COBOL (ver detalle en Anexo II con fecha de acceso) y nos explicaron los módulos habilitados y la información a la que podemos acceder por dicho sistema, nos informan que sólo brinda información de ingresos (compras) de materias primas y no aportaría información de bajas, ni de stocks de subproductos o productos elaborados”.

Luego fueron conducidos los auditores forenses -siempre a la busca de la sensible información de stocks- al sistema BALANZA; dicen al respecto en su Tercer Informe de Avance:

“Nos informaron que los movimientos de stock se pueden observar desde el sistema denominado BALANZA, el cual contempla las entradas a planta de los granos y la producción de cada planta de la Concursada, por ende, se pidió acceso a dicho sistema. El acceso a dicho sistema (ver detalle en Anexo II) permitió acceder a los movimientos de stocks por planta y por producto, pero no fue posible obtener un informe con las existencias de los productos a una fecha”.

Ello obligó a los forenses a poner en práctica medios alternativos para dar con la información buscada, ya que acudiendo a los sistemas contables de la propia Vicentin les resultó un imposible.

A partir de estos antecedentes, la Sindicatura, en lugar de concluir ligeramente en la regularidad de las registraciones contables de Vicentin, debió al menos explicar por qué ella sí puede arribar a esa conclusión a pesar de todos los problemas y deficiencias en los sistemas contables de la concursada que exponen los auditores forenses.

En otras palabras, debió despejar esas dudas y explicar con precisión y contundencia el funcionamiento de los sistemas contables (ORACLE, COBOL, BALANZA) y cómo a través de la interacción de esas plataformas puede llegarse a una información precisa sobre, por ejemplo, existencias de stocks a una fecha determinada.

Por supuesto que no lo hizo, y ello revela el nivel de superficialidad y dogmatismo con que abordó el análisis en cuestión.

V - SOBRE RENOVA S.A.:

Afirma la Sindicatura que *“Frente a la crisis económico financiera analizada en el apartado “Causas de la cesación de pagos” y las dificultades de acceso a financiación de terceros, la concursada analizó la posibilidad de obtener un préstamo con garantía sobre las acciones de Renova SA en poder de Vicentin Paraguay SA.”*

En primer lugar, es de señalar la imprecisión en que incurre la Sindicatura, pues no explica de qué manera podría prendarse un paquete accionario que ya se encontraba prendado.

Otra imprecisión grave para destacar por parte de la Sindicatura en la ponderación de este tema es la referida a su afirmación en cuanto a que: *“En ese contexto (explicado en las causas de la cesación de pagos), se decidió la venta de las acciones de Renova SA en poder de Vicentín Paraguay SA con un único oferente posible ya que a partir del acuerdo de accionistas se había convenido un Right of first Refusal (derecho a primer oferta o derecho de preferencia) a favor del otro accionista de Renova SA.”*

Ello pone en evidencia el desconocimiento de la Sindicatura respecto del funcionamiento de un típico *Right of First Refusal*.

Es que ese derecho no determina la existencia de un único oferente, sino la posibilidad de que, frente a una transacción de venta, el beneficiario de ese derecho pueda igualar las condiciones ofrecidas por el candidato elegido por el vendedor para comprar el paquete accionario en venta.

Pero constituye un error conceptual grueso

afirmar que la figura determinaba “*un único oferente posible*”.

Por otro lado, y en cuanto a los pagos realizados por la concursada con la liquidez obtenida de la venta de dicha participación en Renova, hay que decir que, si bien es cierto que una parte significativa del producido de la venta del 16.67% de Renova se destinó a cancelar deuda comercial, también es cierto que una parte relevante de dichos pagos tuvo como destinatario a la propia Glencore, empresa compradora de dicha tenencia.

Así lo expone el Informe de Intervención N° 3 (al que por supuesto la Sindicatura no refiere) confeccionado en el mes de febrero de 2021 con el exclusivo propósito de informar sobre “*la operación de compraventa de acciones de Renova S.A. celebrado entre la hoy concursada y la firma Renaisco B.V.*”

Allí, y también en el Tercer Informe de Avance de los auditores forenses, se da cuenta con claridad de que el importe de USD 29,4 millones del precio recibido fue destinado a cancelar a la cancelación por parte de la Concursada de la deuda con Renova y el Préstamo “Moreno” (en alusión a Oleaginosa Moreno S.A., empresa controlada por Glencore).

Sin dudas la cancelación precitada no fue ajena a las negociaciones mantenidas por las partes en el marco de la transacción, sino que integró la ecuación de compra, en un marco de total falta de transparencia y de espaldas al resto de los acreedores, en una situación en la que Vicentin cometía ya actos desesperados de liquidar activos para aplicarlos luego sin ninguna planificación seria.

Hemos escuchado hasta el cansancio las manifestaciones de parte de la Compañía acerca del valor estratégico de Renova, que la Sindicatura replica en su informe.

Sin embargo, la Compañía declama una cosa, y hace exactamente lo opuesto.

Al momento de la venta del 16.67% en Renova, Vicentin era consciente que el producido de dicha venta sería a todas luces insuficiente para atender la avalancha de fijaciones realizadas por los acreedores comerciales. Basta una matemática simple para sostener nuestra afirmación. En tan solo cuestión de [3] días, los fondos provenientes de la venta se dilapidaron sin ningún tipo de plan, dejando a la Compañía en condición de accionista minoritario en Renova, sin dudas el activo más importante dentro de su patrimonio.

Más allá del momento en que se produjo la venta, a nuestro juicio, totalmente cuestionable, y el hecho de que dicha transacción implicó la pérdida de una posición de co-control en Renova, **no encontramos en el Informe ninguna referencia en cuanto a la metodología utilizada por la Compañía para la determinación del precio de venta.**

El Informe tibiamente traza una comparación con el valor libros de Renova, lo cual no escapa del abordaje superficial que se observa a lo largo del documento en el tratamiento de todos y cada uno de los temas.

VI - FORMULAN RESERVA:

Por medio del presente, se formula expresa reserva de ampliar los argumentos expuestos en este escrito una vez se presente el informe final de los auditores forenses y/o surja de la actuación de los interventores y/o veedores y/o de la sindicatura y/o de la propia concursada y/o de cualquier otro sujeto interviniente y/o de las constancias

de las causas penales en trámite cualquier dato de interés para el esclarecimiento de cualquiera de los puntos incluidos u omitidos en el Informe General de la Sindicatura.

De igual modo, se formula expresa reserva de observar lo relativo al inc. 2º del art. 39 L.C.Q. ("comprobación actualizada y detallada del activo y del pasivo, con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles"), habida cuenta del diferimiento en el tratamiento de este capítulo hasta tanto la Sindicatura cuente con el balance auditado correspondiente al ejercicio contable cerrado el 31/10/2020.

Sin que esto, desde ya, suponga asentimiento a ninguno de los conceptos o apreciaciones que la Sindicatura vierte en las págs. 70/74 del Informe.

VII - PETITORIO:

En virtud de lo expuesto, se solicita de V.S. tenga presente las observaciones expuestas en los términos del art. 40 L.C.Q., así como las expresar reservas formuladas en el Capítulo VI; y - de considerarlo pertinente- requiera de la Sindicatura todas las aclaraciones necesarias a partir de las observaciones que aquí se formulan.

Se provea de conformidad.

SERÁ JUSTICIA.


Dr. Matías López Figueroa
DNI 26.781.902

Matías López Figueroa

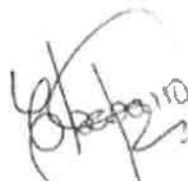
DNI 26.781.902


Dra. María Leiva Canfrés
ABOGADA
MAT. PROF. L° III - F° 99
C.E.J.A.L. T° 801 - F° 588

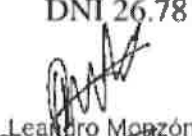


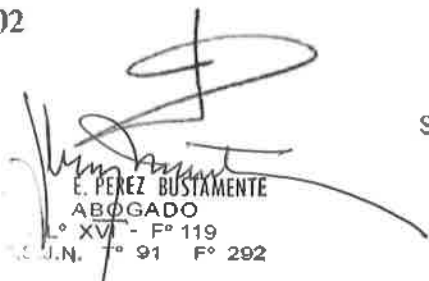
Martín Beretervide

DNI 26.281.461


Dra. Silvia B. Romero
ABOGADA
L° XXVIII - F° 224

Dra. SILVIA B. ROMERO
ABOGADA
L° XXVIII - F° 224


Leonardo Monzón


E. PÉREZ BUSTAMENTE
ABOGADO
L° XVI - F° 119
C.E.J.A.L. T° 91 - F° 292


Sebastián Spiller

